



D.C. 89/2021

QUEJOSA:

[REDACTED]
(actora)

**MAGISTRADO PONENTE:
ALEJANDRO VILLAGÓMEZ
GORDILLO**

**SECRETARIA:
MARITZA AZUZENA OSUNA
MARTÍNEZ**

Ciudad de México, a veintiuno de mayo de
dos mil veintiuno.

V I S T O, para resolver, el juicio de amparo
directo D.C. 89/2021, promovido
Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero
or conducto de su apoderado

Pineda, contra la resolución que puso fin al juicio de treinta de noviembre de dos mil veinte, emitida por el Cuarto Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, del Primer Circuito, en el toca número 241/2020, relativo al juicio Ejecutivo Mercantil, seguido por la hoy quejosa, en contra de [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y de [REDACTED] [REDACTED] por considerarla violatoria de los artículos 1º, 14 y 16 Constitucionales; así como su ejecución atribuida al Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, y,

RESULTANDO

PRIMERO. Mediante escrito presentado electrónicamente el treinta de julio de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, [REDACTED] México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero [REDACTED] demandó, por



conducto de su apoderado Gerardo Quintana Pineda, en la vía Ejecutiva Mercantil de [REDACTED] SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE y de [REDACTED] [REDACTED], lo siguiente:

“(a) El pago de la cantidad de \$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, en términos del Contrato de Crédito, según se define más adelante.

“(b) El pago de la cantidad de \$469,412.07 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 07/100 M.N.), por concepto de intereses ordinarios vencidos y no pagados en términos del Contrato de Crédito, según se define más adelante.

“(c) El pago de la cantidad de \$348,664.33 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO (SIC) 33/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios en términos del Contrato de Crédito, según se define más adelante calculados hasta el 20 de febrero de 2020, más aquellos intereses moratorios que se sigan generando hasta el pago total de las prestaciones reclamadas, los que se cuantificarán en ejecución de sentencia.

“(d) El pago de los gastos y costas que se generen por la tramitación del presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 1084 del Código de Comercio; lo cual será cuantificado en ejecución de sentencia.”

**COMO HECHOS DE SU DEMANDA, NARRÓ
LO SIGUIENTE:**

“1. [REDACTED] es una institución crediticia cuyo objeto social consiste principalmente en la prestación especializada de servicios y productos bancarios y financieros, con domicilio ubicado en [REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] código postal 06500, Ciudad de México, tal como se acredita con la escritura pública número 33,647 de fecha 23 de julio de 2019, pasada ante la fe de

la Ciudad de México, que adjunto al presente escrito se exhibe como Anexo Uno.

“Ahora bien, en cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 1061 del Código de Comercio, se exhibe copia simple de la identificación de los suscritos y la Cédula de Inscripción al Registro Federal de Contribuyentes, documentos que se acompañan al presente como Anexos Dos y Tres, respectivamente.



"2. Con fecha 23 de octubre de 2018, [REDACTED] como Acreditante, la sociedad denominada [REDACTED] S.A. DE C.V., como Acreditada (en lo sucesivo [REDACTED] o la "Acreditada", y el señor [REDACTED] como Obligado Solidario y avalista (en lo sucesivo el "Obligado Solidario" celebraron un Contrato de Apertura de Crédito en Cuenta Corriente (en lo subsecuente identificado como el "Contrato de Crédito" el cual adjunto se exhibe como Anexo Cuatro.

"Al amparo del Contrato de Crédito, [REDACTED] otorgó a [REDACTED] un crédito, hasta por la cantidad de \$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), sujeto, entre otras, a las siguientes cláusulas:

"[...]

"*"DÉCIMA PRIMERA. LUGAR Y FORMA DE PAGO. Los pagos que la PARTE ACREDITADA deba efectuar conforme a este Contrato deberá realizarlos en cualquiera de las sucursales del Banco a través de su cuenta de cheques, en días y horas hábiles y dentro del horario de atención al público de dichas sucursales, sin necesidad de requerimiento previo, mediante entregas en efectivo o cheques, pero de éstos no se aplicará su importe sino hasta que hubieren sido cobrados. Para tal efecto, por días y horas hábiles se entenderán los días no dispuestos por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para cerrar operaciones en términos del artículo 95 de la LIC. En caso de que por cualquier causa el día establecido para cualquier pago resulte inhábil, el pago deberá efectuarse el Día Hábil inmediato posterior, cobrándose intereses a esa fecha.*

“La Parte Acreditada faculta al Banco para cargar en cualquier cuenta de cheques que el Banco les opere o llegare a operarles, todos los adeudos por concepto de capital, intereses, comisiones, gastos y demás accesorios derivados de este Contrato, o de cualquier otra relación jurídica que tengan o llegaren a tener con cualquier entidad del Grupo Financiero al que pertenece el Banco. Asimismo, queda entendido que el Banco podrá optar por hacer el cargo respectivo o por el vencimiento anticipado del presente Contrato.”

“[...]

“TRIGÉSIMA TERCERA. LEY APLICABLE, TRIBUNALES COMPETENTES. Para la interpretación y cumplimiento del presente Contrato, serán aplicables las leyes de México y se someten irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la Ciudad de México, para conocer de cualquier controversia que se suscitase con motivo de la Interpretación o ejecución de este Contrato, a cuyo efecto las partes renuncian al fuero de cualquier otro domicilio, presente o futuro o que por cualquier otra razón pudiera corresponderles.”

[Énfasis añadido].

“3. Con fecha 31 de julio de 2019, [REDACTED] realizó una disposición al amparo del Contrato de Crédito (en lo subsecuente referida como la **“Disposición”**, por la cantidad de \$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), y para documentarlo suscribió, en esa misma fecha, un pagaré a favor de [REDACTED], por la referida cantidad, a través del cual se estableció que el pago de los \$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), debería realizarse en



una sola amortización el día 31 de octubre de 2019.

"Asimismo, a través del referido Pagaré se pactó respecto a las tasas de intereses aplicables a la Primera Disposición, lo siguiente:

"[...]"

"Lo anterior se acredita con el original del pagaré de fecha 31 de julio de 2019, relativo a Disposición, el cual adjunto se exhibe como Anexo Cinco,

"4. El 31 de octubre 2019, fecha de vencimiento de la amortización de capital pactada respecto de la Disposición, en términos del Pagaré de fecha 31 de julio de 2019,

omitieron realizar el pago de la cantidad de \$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.).

"5. Atendiendo a lo narrado en los hechos anteriores al día de [REDACTED] el señor

[REDACTED] adeudan a

[REDACTED] (i) la cantidad de \$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.), por concepto de suerte principal, en términos del Contrato de Crédito; (ii) \$469,412.07 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 07/100 M.N.), por concepto de intereses ordinarios vencidos y no pagados en términos del

Contrato de Crédito; y (iii) la cantidad de \$348,664.33 (TRESCIENTOS CUARENTA Y OCHO MIL SEISCIENTOS SESENTA Y CUATRO (sic) 33/100 M.N.), por concepto de intereses moratorios en términos del Contrato de Crédito, calculados hasta el 20 de febrero de 2020, tal como se acredita con el Estado de Cuenta Certificado, emitido por el [REDACTED] [REDACTED], Contador facultado por mi representada, mismo que constituye el Anexo Seis del presente escrito.

“Consecuentemente, en representación de [REDACTED], acudo ante su Señoría a efecto de que, previos los trámites de ley, dicte la resolución que conforme a derecho proceda, por virtud de la cual se condene a los demandados al pago y cumplimiento de las prestaciones reclamadas en la presente demanda, atento a las razones expuestas con anterioridad, mismas que por economía procesal y en obvio de repeticiones, solicito se tengan aquí por reproducidas como si se insertasen a la letra, para todos los efectos legales a que hubiere lugar.”

SEGUNDO. Por resolución de treinta y uno de julio de dos mil veinte, el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, a quien por cuestión de turno correspondió el conocimiento del



asunto, dispuso formar expediente y registrarlo en el libro de gobierno con el número 125/2020-B y entre otras determinaciones desechó la demanda al declarar carecer de competencia legal por razón de territorio.

TERCERO. En desacuerdo con el fallo anterior, la parte actora [REDACTED] México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero [REDACTED] por conducto de su apoderado Gerardo Quintana Pineda, mediante escrito presentado el once de agosto de dos mil veinte, ante la Oficialía de Partes del Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, interpuso recurso de apelación, del que conoció el **Cuarto Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito**, misma que dictó resolución que puso fin al juicio el **treinta de noviembre de dos mil veinte**, en el toca de apelación número 241/2020, cuyos puntos resolutivos son los siguientes:

“ÚNICO. Se **CONFIRMA** el auto recurrido del treinta y uno de julio de dos mil veinte, por el

Juez Décimo de Distrito en Materia Civil de la Ciudad de México, en el Juicio Ejecutivo Mercantil 125/2020.

“Notifíquese y, por oficio, al juez recurrido, a quien además de la copia autorizada de esta determinación, se le deberán devolver las constancias que remitió. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno y en su oportunidad, archívese el toca como asunto concluido.

“**Así lo resolvió Jorge Abel Guzmán Martínez**, Secretario en funciones de Magistrado del Cuarto Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, autorizado en términos de los artículos 26, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, mediante oficio CCJ/ST/2463/2020 de diecinueve de octubre de dos mil veinte, signado por el Secretario Técnico de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, asistido de **Noé Morales Guzmán**, Secretario que da fe.”

CUARTO. Inconforme con el fallo anterior, la actora ahora quejosa [REDACTED] México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero [REDACTED]



promovió juicio de amparo directo, por conducto de su apoderado **[REDACTED]**, cuya demanda se admitió en este Tribunal Colegiado por acuerdo de su presidente de **cinco de abril de dos mil veintiuno**, en el que se ordenó dar vista a las partes para los efectos señalados en el artículo 181 de la Ley de Amparo; al tratarse de una resolución que no admitió la demanda, no hay tercero interesado; asimismo se ordenó la intervención que corresponde a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, quien no formuló pedimento. Finalmente, por auto de electrónico de **veintinueve de abril de dos mil veintiuno**, se turnó el expediente al magistrado relator **Alejandro Villagómez Gordillo** para la elaboración del proyecto de resolución correspondiente, en los términos que dispone el artículo 183 de la Ley de Amparo, y

CONSIDERANDO

PRIMERO. Este Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, es legalmente competente para conocer y resolver el presente juicio de

amparo directo, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 103, fracción I, 107, fracciones III, inciso a), V, inciso c) y VI, de la Constitución General de la República; 170 de la Ley de Amparo; y 37, fracción I, inciso c), de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; **y el contenido del Acuerdo 3/2013, emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, que dejó sin efectos el diverso Acuerdo General 17/2012, de dieciséis de mayo de dos mil doce,** asimismo con apoyo en los Acuerdos Generales 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 21/2020, 25/2020 y 37/2020 del mismo Pleno, Relativos al Esquema de Trabajo y Medidas de Contingencia en los Órganos Jurisdiccionales por el Fenómeno de Salud Pública Derivado del virus Covid-19, así como las circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/06/2021, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Propio Consejo de la Judicatura Federal, por reclamarse una resolución que puso fin al juicio dictada en un **juicio**



Ejecutivo Mercantil pronunciada por una autoridad jurisdiccional residente en este circuito, asunto que se resuelve durante el periodo a que se refiere este último Acuerdo.

SEGUNDO. La demanda de amparo fue promovida por parte legítima y presentada en tiempo, toda vez que la resolución que puso fin al juicio, se notificó a las partes electrónicamente el **dos de diciembre de dos mil veinte**, y surtió sus efectos el día hábil siguiente, esto es, el **tres del mismo mes y año**. En esa virtud, el término de **quince días** a que se refiere el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del **cuatro de diciembre de dos mil veinte al nueve de marzo de dos mil veintiuno**, debiendo descontarse de dicho término, los días **del cinco de diciembre de dos mil veinte al diecisiete de febrero de dos mil veintiuno**, así como **veinte, veintiuno, veintisiete y veintiocho del mismo mes y año, además del seis y siete de marzo del citado año**, por ser inhábiles, de conformidad con los artículos 19 de la Ley de Amparo y 163 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la

Federación. Luego, como la demanda se presentó el último día del plazo, su promoción resulta oportuna.

TERCERO. La existencia del acto reclamado se encuentra acreditada con el informe justificado rendido por el Tribunal Unitario responsable, quien remitió en su apoyo los autos del juicio.

CUARTO. Las consideraciones y fundamentos que sustentan la resolución recurrida, son de este tenor:

“PRIMERO. COMPETENCIA. Este Tribunal Unitario es competente para conocer y resolver el recurso, con fundamento en los artículos 104, fracción II, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 29, fracción II y 31, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación.

“Lo anterior, toda vez que fue interpuesto contra un auto emitido en un juicio ejecutivo mercantil por un Juez de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México, ámbito territorial y materia respecto de los que este Tribunal ejerce jurisdicción.

“SEGUNDO. DETERMINACIÓN IMPUGNADA.
El proveído recurrido obra a fojas 60 a 68 del



juicio de origen; constancias que cuentan con valor probatorio pleno en términos de lo previsto en el artículo 1294 del Código de Comercio.

"TERCERO. TRANSCRIPCIÓN DE CONSTANCIAS. Al no existir disposición legal que obligue al órgano jurisdiccional a transcribir la determinación impugnada ni los motivos de disenso formulados por la recurrente, se omite su reproducción¹.

"CUARTO. ANTECEDENTES. A fin de resolver la cuestión sometida a consideración de este Tribunal, se reseñan los antecedentes que dieron origen a la emisión del proveído impugnado.

"1.- [REDACTED] México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero [REDACTED] demandó en la vía ejecutiva mercantil a Capizzi, Sociedad Anónima de Capital Variable en su carácter de acreditada y a [REDACTED] [REDACTED] como obligado solidario, las prestaciones siguientes:

"a) El pago de la cantidad de \$15'000,000.00 (QUINCE MILLONES DE PESOS 00/100 M.N.) por concepto de suerte principal, en términos

¹ Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, tomo XXXI, mayo de dos mil diez, página 830, de rubro: **"CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN."**

del Contrato de Crédito, según se define más adelante.

“b) El pago de la cantidad de \$469,412.07 (CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS DOCE PESOS 07/100 M.N.) por concepto de intereses ordinarios vencidos y no pagados en términos del Contrato de Crédito, según se define más adelante.

“c) El pago de la cantidad de \$348,664.33 (trescientos cuarenta y ocho mil seiscientos sesenta y cuatro (sic) 33/100 M.N.) por concepto de intereses moratorios en términos del Contrato de Crédito, según se define más adelante calculados hasta el 20 de febrero de 2020 más aquellos intereses moratorios que se sigan generando hasta el pago total de las prestaciones reclamadas, los que se cuantificarán en ejecución de sentencia.

“d) El pago de los gastos y costas que se generen por la tramitación del presente juicio, en términos de lo dispuesto por el artículo 1084 del Código de Comercio; lo cual será cuantificado en ejecución de sentencia.”

“2. En proveído de treinta y uno de julio de dos mil veinte, el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en esta ciudad, se declaró legalmente incompetente (por razón de territorio) para conocer del asunto y determinó desechar la demanda, al considerar que tal competencia se surte a favor de un juzgado que ejerza jurisdicción en Irapuato, Guanajuato, por corresponder al lugar donde se ubica el domicilio de los demandados.

“Las razones de esa determinación son, esencialmente, las siguientes:

“a) Del contrato de crédito que exhibe la promovente, como base de sus pretensiones,



se advierte que en la cláusula treinta y tres, los contratantes convinieron lo siguiente:

“TRIGÉSIMA TERCERA. LEY APLICABLE, TRIBUNALES COMPETENTES.

“Para interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán aplicables las leyes de México y se someterán irrevocablemente a la jurisdicción de los Tribunales competentes de la Ciudad de México, para conocer de cualquier controversia que se suscitase con motivo de la interpretación o ejecución de este contrato a cuyo efecto las partes renuncian al fuero de cualquier otro domicilio presente o futuro, o que por cualquier otra razón pudiera corresponderles.”

“Sin embargo, dicho pacto de sumisión no debe tenerse como válido, en cuanto a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de México, porque esta ciudad no se ubica en alguno de los supuestos contenidos en el artículo 1093 del Código de Comercio, que prevé de manera limitativa, los casos en que las partes pueden asumir un pacto de sumisión expresa de manera válida.

“Lo anterior, porque de la carátula del contrato de crédito basal, como del contrato mismo, se advierte que el domicilio de las demandadas se encuentra en Irapuato, Guanajuato.

“Si bien en la carátula del contrato basal, se señaló como domicilio de [REDACTED] México, Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero [REDACTED] el ubicado en [REDACTED]

[REDACTED] Delegación Cuauhtémoc, Ciudad

de México, código postal lo cierto es que tal contrato fue firmado en León, Guanajuato, lo que evidencia que fue suscrito en la sucursal de la promovente ubicada en ese lugar.

“En tal virtud, debe tenerse como domicilio de la demandada el de la sucursal indicada, pues de conformidad con lo dispuesto en el artículo 33 del Código Civil Federal, tratándose de personas morales, las sucursales que operen en lugares distintos de donde radique la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales.

“La limitación del pacto de sumisión expresa se actualiza en el supuesto en el que exista una controversia entre una persona física y una moral con sucursales en diversos lugares de la República y que en el documento fundante, la persona física se someta a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual -a pesar de que su contraria igualmente tenga lugar de residencia en el domicilio de su contraparte-, dado que esa circunstancia conlleva forzosamente la necesidad de trasladarse a una ciudad distinta para efectuar la defensa de sus pretensiones, lo que sin duda generará un detrimento económico considerable que pudiera traducirse en .



impedimento o denegación de acceso a la justicia.

“Es decir, cuando las sociedades no ofrecen sus servicios únicamente dentro de la jurisdicción territorial en donde se ubica su administración, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por ello, es lógico y razonable estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a las personas que celebran contratos con dichas sociedades a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia.

“Consecuentemente, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, tratándose de contratos celebrados con sociedades que ofrecen sus servicios en diversos lugares de la República, esa regla no cobra aplicación cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 constitucional, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se

encuentre su domicilio, siempre y cuando también se proteja el Interés de la sociedad demandada, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se desenvuelva la controversia.

“En apoyo de lo anterior, citó la jurisprudencia 1a./J. 1/2019, de rubro: **“COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.”**²

“b) Del contrato base de la acción, se advierte que los contratantes tampoco señalaron lugar alguno para que el deudor fuera requerido judicialmente de pago, ni se precisó en dónde se cumpliría la obligación contraída, y toda vez que el pacto de sumisión expresa no es aplicable al presente caso, y los codemandados cuentan con domicilio cercano a la sucursal de la promovente donde se suscribió el contrato de crédito exhibido como base de la acción, siendo en Irapuato,

² Publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Libro 65, abril de 2019, Tomo I, página 689.

Guanajuato, por tanto, corresponde a un juez con competencia en dicha entidad federativa, conocer del presente asunto.

“QUINTO. SÍNTESIS DE AGRAVIOS. La recurrente aduce, en esencia, los siguientes:

“1. Existió una sumisión expresa a la competencia de los Tribunales de la Ciudad de México, no sólo atendiendo al acuerdo de voluntades que se encuentra amparado con el contrato bancario de adhesión suscrito por las partes, sino también porque el domicilio de la actora se encuentra en la Ciudad de México.

“2. A pesar de que se cuenta con diversas sucursales a lo largo del territorio nacional, ello no es suficiente para suponer que la competencia en caso de controversia se regirá única y exclusivamente por el lugar en donde se encuentre la sucursal donde se celebró el contrato bancario, sino que siempre se debe atender a la voluntad de las partes que se sometieron al clausulado expreso de ese contrato.

“3. El contrato de crédito en cuenta corriente base de la acción no constituye un contrato de adhesión, por ende, no es aplicable la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 invocada por el A quo para sostener su incompetencia.

“En términos de lo establecido en la Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros y las disposiciones de

carácter general en materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito, Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas, emitidas por la CONDUSEF, el contrato de adhesión bancario puede definirse como el documento elaborado unilateralmente por las Instituciones Financieras para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la celebración masiva de operaciones pasivas, activas o de servicios que lleven a cabo con los usuarios, en el entendido que estos últimos no podrán negociar dichos términos y condiciones.

“Al respecto, la CONDUSEF emitió las Disposiciones de carácter general en materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas, en las que se establecen cuáles serán consideradas operaciones masivas y cuáles contratos requerirán autorización previa de la CONDUSEF para la celebración de sus operaciones y servicios financieros.

“En el artículo 3 de las citadas Disposiciones, se establece que se considerarán masivos aquellos contratos que documenten operaciones inferiores a 900,000 Unidades de Inversión (UDI), es decir, \$5'835,142.80 (cinco



millones ochocientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.).

“De una interpretación a contrario *sensu* del precepto aludido, válidamente se puede concluir que aquellas operaciones superiores a la cantidad referida, no constituyen contratos de adhesión masivos.

“En el caso concreto, el documento base de la acción constituye un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente que documentó una operación de un monto superior al consignado por el artículo 3 de las Disposiciones de Carácter General, por ende, no se encuentra sujeto a los supuestos normativos contenidos en el capítulo II de las referidas Disposiciones, al no constituir una operación masiva.

“Además, debido a la naturaleza del contrato, su clausulado es acordado y sancionado por las partes contratantes, como se advierte del propio documento en el que constan las firmas autógrafas tanto del acreditado como del obligado solidario en cada una de sus páginas.

“SEXTO. DECISIÓN DE ESTE TRIBUNAL UNITARIO. Los agravios esgrimidos por el recurrente son **inoperantes** en una parte e **infundados** en otra, cuyo estudio se realizará en orden distinto al propuesto, por cuestión de método.

“Es **infundado** el agravio 3, pues en cuanto a los contratos de adhesión, la Ley de Protección

y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, en su artículo 56, segundo párrafo, los define de la manera siguiente:

“Artículo 56. Como una medida de protección al Usuario, la Comisión Nacional revisará y, en su caso, propondrá a las Instituciones Financieras, modificaciones a los modelos de contratos de adhesión utilizados en sus diversas operaciones, en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 11 de esta Ley.

“Se entenderá por contrato de adhesión, para efectos de esta Ley, aquél elaborado unilateralmente por una Institución Financiera, cuyas estipulaciones sobre los términos y condiciones aplicables a la contratación de operaciones o servicios sean uniformes para los Usuarios.”

“Así, el contrato de adhesión es aquel en que las partes no pactan en igualdad de condiciones ni tienen la posibilidad de transigir o negociar entre iguales. Por ello, es sumamente significativo que una de ellas ve limitada la autonomía de su voluntad (a la mera “libertad de contratar”), pues ésta se reduce a decidir si acepta o no los términos del contrato; de modo que carece de auténtica “libertad de contratación”, es decir, a influir de manera decisiva en el contenido y regulación de la relación jurídica que entabla.

“La característica distintiva del contrato de adhesión reside en el hecho de que no son ambas partes las que redactan el clausulado, sino que éste es predispuesto por una de ellas



a la otra, que no puede más que aceptarlo o rechazarlo.

“Ante este panorama, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a) invocada por el *A quo*, determinó que las cláusulas de los contratos bancarios de adhesión **deben interpretarse a la luz de los derechos del usuario, buscando equilibrar la situación de desventaja en que se encuentra frente al proveedor del servicio financiero.** Pues consideró que este tipo de contratos de adhesión son susceptibles de afectar los derechos del consumidor, a saber:

“a) El proveedor tiene la posibilidad de incluir cláusulas desfavorables para el consumidor.

“b) El consumidor no negocia y, por ende, no puede incidir de forma alguna en la elaboración del contrato.

“c) Se presenta una doble asimetría en la información entre la institución financiera y el usuario: respecto del servicio, y también respecto de la formulación y las implicaciones del contrato que firma (pues no formó parte de la elaboración de las cláusulas y no necesariamente tiene el conocimiento técnico para comprenderlas a cabalidad).

“Indicó que si bien es cierto que el consumidor es libre para otorgar su consentimiento en los contratos de adhesión, también lo es que en

dichas relaciones necesariamente se ubica en una posición de vulnerabilidad frente al proveedor (banco).

“Consecuentemente, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, lo cierto es que tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio **tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio.**

“Dicho criterio es del tenor siguiente:

“COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1093 y 1120 del Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable, en atención a que las partes de un acto jurídico pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar a través del pacto de sumisión, mediante el cual los interesados



manifiestan su voluntad en forma expresa. Sin embargo, para que se configure esa sumisión, necesariamente debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa. Ahora, si bien es cierto que en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos –entre los que se encuentran los contratos de adhesión de prestación de servicios bancarios–; también lo es que esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual. Efectivamente, constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por tales actividades. Por lo anterior, resulta lógico y razonable estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, máxime si estamos en presencia de un contrato mercantil de adhesión cuyos términos no resultan negociables. Consecuentemente, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, lo cierto es que tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el

artículo 17 de la Constitución Federal, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio, siempre y cuando también se proteja el interés de la institución crediticia demandada, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se desenvuelva la controversia.””³

“En la especie, del contrato exhibido como base de la acción en el juicio de origen, se observa que se trata de un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, el cual, adverso a lo aseverado por el recurrente, **se considera un contrato de adhesión.**

“Es así, porque un contrato bancario puede considerarse como la relación que se establece entre una entidad financiera y cualquiera de sus clientes por la que surgen una serie de obligaciones para las partes y que guarda relación con los productos y servicios ofrecidos por dicha entidad. Generalmente, los contratos bancarios son redactados por las entidades financieras, que incorporan idénticas “Condiciones generales y particulares” para todos los clientes que los suscriben y sobre las cuales estos últimos tienen un margen de negociación escaso o nulo, lo que los convierte en contratos de adhesión.

³ Décima Época; SJF; Tomo I; Jurisprudencia: 1a./J. 1/2019 (10a.); Primera Sala; Registro digital: 2019661; página 689.



“Pues bien, en el caso se advierte que en el documento basal los obligados no tuvieron la facultad de negociar los términos del acuerdo, aun cuando hubiesen leído y entendido los términos del mismo y desearan negociar la modificación de algunas de sus cláusulas, ya que carecen de la posibilidad para efectuar dichos cambios, lo que constituye una característica común de los contratos de adhesión.

“Además, reúne las características de haber sido elaborado unilateralmente por la institución crediticia recurrente, ya que contiene un clausulado general preredactado, pues se especifican los datos particulares del crédito, así como de los obligados; tales como forma de disposición, el plazo máximo de disposición del crédito, el monto, el tipo de moneda, las tasas aplicables -ordinaria y moratoria-, el importe de la línea de crédito, los nombres de los obligados.

“Por esto, se actualiza el supuesto establecido por el Más Alto Tribunal de Justicia del país, en cuanto a que, a los contratos bancarios de adhesión no es aplicable el pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, ya que constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de

una jurisdicción territorial específica, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por tales actividades.

“Lo que conlleva a que en caso de controversia, no deba obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, si se está en presencia de un contrato mercantil de **adhesión** cuyos términos no resultan negociables, como es el caso.

“Aunado a que de los datos específicos que obran en el contrato bancario de adhesión exhibido como documento base en el juicio de origen, se aprecia que la parte demandada señaló que su domicilio estaba ubicado en Irapuato, Guanajuato.

“Lo que evidencia que se trata de un contrato bancario de adhesión, en el cual, los codemandados tienen su domicilio en el Estado de Guanajuato.

“No obstante, en el contrato de adhesión basal se estipuló una cláusula de sumisión a los Tribunales de la Ciudad de México, lo que revela que en momento alguno fue considerado como parámetro el lugar donde se encuentra el domicilio de los presuntos demandados.

“Por lo anterior se determina que, como bien lo refirió el *A quo*, no puede considerarse válida



la cláusula de sumisión expresa señalada en el contrato de adhesión exhibido como base en el juicio de origen, pues ante el desequilibrio contractual en que se encuentran, debe prevalecer la interpretación contraria al estipulante y favorable al usuario adherente.

“Por otra parte, resultan **inoperantes** los motivos de inconformidad 1 y 2, en los que esencialmente se sostiene que el *A quo* es competente para conocer del asunto, en razón del domicilio estipulado en el contrato para el caso de controversia y porque el domicilio de la Institución Financiera -actora- se encuentra en la Ciudad de México.

“Lo anterior, porque tales argumentos compiten con lo expresado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia transcrita en párrafos precedentes, en la que se estableció que si bien en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos -entre los que se encuentran los contratos de adhesión de prestación de servicios bancarios-; lo cierto es que esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, como en el particular acontece.

“Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 14/97, de rubro y texto:

“AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA.- Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado.”⁴

QUINTO. La actora ahora quejosa [REDACTED]

[REDACTED] Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero [REDACTED] expresó como conceptos de violación, los siguientes:

“PRIMERO.- ILEGALIDAD DE LA SENTENCIA DEFINITIVA AL HABER VIOLADO EL PRINCIPIO DE LEGALIDAD, EN VIRTUD DE HABERSE DICTADO CON UNA INDEBIDA FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN, ADEMÁS DE SER VIOLATORIA A LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD.

“A través del presente concepto de violación, se acreditará a su Señoría que la Sentencia Reclamada viola el principio de legalidad, y el derecho de seguridad jurídica en virtud de que fue emitido en violación a los principios de legalidad, al incurrir en una indebida

⁴ Novena Época; SJF; Tomo V, Jurisprudencia:1a./J. 14/97; Primera Sala; Registro digital: 198920; página 21.



fundamentación y motivación, así como a los principios de congruencia y exhaustividad, en virtud de que el Magistrado Responsable erróneamente considera que el contrato base de la acción es un contrato de adhesión fundando su determinación el Artículo 56 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros (en adelante, la "Ley CONDUSEF"). sin tomar en consideración lo expresado por [REDACTED] en su concepto de violación, consistente en que el artículo 3 de las Disposiciones de carácter general en materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas, emitidas por la Comisión Nacional para la Defensa al Usuario de Servicios Financieros (en adelante, "CONDUSEF"), establece un tope para los contratos que pueden ser considerados de adhesión, a saber, la cantidad de 900.000 Unidades de Inversión⁵ ("UDI") -es decir, \$5'835,142.80 (Cinco millones ochocientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.).

"Lo anterior, no obstante, como se narró, y como consta en la demanda inicial, el crédito otorgado por [REDACTED] S.A. de C.V. (en

⁵ \$6.483492 pesos - Valor de la Unidad de Inversión al 16 de julio de 2020.

<https://www.banxico.org.mx/SieInternet/consultarDirectorioInternetAction.do?sector=8&accion=consultarCuadro&idCuadro=CP150&locale=es>

adelante, [REDACTED] fue por la cantidad de \$15'000,000.00 (Quince millones de pesos 00/100 M.N.) razón por la cual, el contrato base de la acción no es un contrato de adhesión, y por tanto no le es aplicable la jurisprudencia aplicada por (i) el Juez Responsable, y posteriormente confirmado por (ii) la Sala Responsable, y aun así, dichas autoridades responsables, consideraron que la sumisión expresa a los juzgados de la Ciudad de México acordada por las partes, no es válida, en virtud de que - erróneamente - consideraron que el contrato base de la acción es un contrato de adhesión.

"Es por ello, que a través del presente concepto de violación, ese H. Tribunal Colegiado quedará convencido: (i) que el contrato base de la acción no es un contrato de adhesión, en virtud de no pacta operaciones masivas; (ii) por tanto el Juez Responsable, y el Magistrado Responsable, aplicaron indebidamente la Jurisprudencia transcrita en la Sentencia Reclamada, y (iii) que se aplicó indebidamente dicha jurisprudencia, máxime que dicha jurisprudencia, fue emitida para fijar competencia en juicios orales mercantiles, en un momento cuando la cuantía para dichos procesos era sumamente baja, así como la Ley CONDUSEF, no obstante [REDACTED] formuló agravios que explicaban por qué no eran



aplicables, máxime que existían elementos objetivos para determinar lo contrario.

“A. Premisa Mayor.

“Preceptos Constitucionales Aplicables:

“Fundamentación y motivación. Los artículos 14 y 16 del texto constitucional consagran el derecho humano de seguridad jurídica y el principio de legalidad, los cuales constituyen unos de los pilares fundamentales del Estado de Derecho y del propio constitucionalismo, en tanto que suponen la necesidad de que toda actuación de los órganos del Estado se sujete a derecho:

“Artículo 14.-

En los juicios del orden civil, la sentencia definitiva deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley, y a falta de ésta se fundará en los principios generales del derecho”

“Artículo 16.- *Nadie puede ser molestado en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones, sino en virtud de mandamiento escrito de la autoridad competente, que funde y motive la causa legal del procedimiento.”*

(Énfasis añadido]

“Así, como se desprende de los preceptos antes citados, para asegurar el derecho fundamental a la legalidad es necesario que cualquier acto proveniente de la autoridad que perturbe a los gobernados en su persona, familia, domicilio, papeles o posesiones provenga de autoridad competente, conste de manera escrita y exprese el fundamento legal y

la motivación de la determinación correspondiente.

“En tal virtud, para considerar que un acto de autoridad cumple de manera cabal con la exigencia constitucional de fundamentación y motivación, es requisito indispensable que, al momento de la emisión del mismo, la autoridad señale las circunstancias de hecho, causas inmediatas y razones particulares que fueron tomadas en cuenta para proceder en contra del particular –motivación-, así como los fundamentos legales aplicables al caso concreto que justifiquen dicha actuación -fundamentación-. En la inteligencia de que no bastará con que la autoridad indique los fundamentos legales y los razonamientos en base a los cuales se haya emitido el acto de molestia respectivo, sino que además deberá existir una adecuación real y lógica entre los fundamentos invocados y los motivos y/o razonamientos expresados por dicha autoridad, es decir, una debida fundamentación y motivación.

“Requisitos sin los cuales, dicho acto deberá de ser declarado ilegal por el órgano jurisdiccional correspondiente, al carecer de los elementos mínimos para su validez. Corroborando lo anterior, las siguientes tesis de jurisprudencia:



“FUNDAMENTACION Y MOTIVACION.- La debida fundamentación y motivación legal, deben entenderse, por lo primero, la cita del precepto legal aplicable al caso, y por lo segundo, las razones, motivos o circunstancias especiales que llevaron a la autoridad a concluir que el caso particular encuadra en el supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.”⁶

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR.- La falta de fundamentación y motivación es una violación formal diversa a la indebida o incorrecta fundamentación y motivación, que es una violación material o de fondo, siendo distintos los efectos que genera la existencia de una u otra, por lo que el estudio de aquella omisión debe hacerse de manera previa. En efecto, el artículo 16 constitucional establece, en su primer párrafo, el imperativo para las autoridades de fundar y motivar sus actos que incidan en la esfera de los gobernados, pero la contravención al mandato constitucional que exige la expresión de ambas en los actos de autoridad puede revestir dos formas distintas, a saber: la derivada de su falta, y la correspondiente a su incorrección. Se produce la falta de fundamentación y motivación, cuando se omite expresar el dispositivo legal aplicable al asunto y las razones que se hayan considerado para estimar que el caso puede subsumirse en la hipótesis prevista en esa norma jurídica. En cambio, hay una indebida fundamentación cuando en el acto de autoridad sí se invoca el precepto legal, sin embargo, resulta inaplicable

⁶ Novena Época; SJF; Tomo III, Jurisprudencia: VI.2o. J/43; SEGUNDO TRIBUNAL COLEGIADO DEL SEXTO CIRCUITO; Registro digital: 203143; página 769.

al asunto por las características específicas de éste que impiden su adecuación o encuadre en la hipótesis normativa; y una incorrecta motivación, en el supuesto en que sí se indican las razones que tiene en consideración la autoridad para emitir el acto, pero aquéllas están en disonancia con el contenido de la norma legal que se aplica en el caso. De manera que la falta de fundamentación y motivación significa la carencia o ausencia de tales requisitos, mientras que la indebida o incorrecta fundamentación y motivación entraña la presencia de ambos requisitos constitucionales, pero con un desajuste entre la aplicación de normas y los razonamientos formulados por la autoridad con el caso concreto. La diferencia apuntada permite advertir que en el primer supuesto se trata de una violación formal dado que el acto de autoridad carece de elementos ínsitos, connaturales, al mismo por virtud de un imperativo constitucional, por lo que, advertida su ausencia mediante la simple lectura del acto reclamado, procederá conceder el amparo solicitado; y en el segundo caso consiste en una violación material o de fondo porque se ha cumplido con la forma mediante la expresión de fundamentos y motivos, pero unos y otros son incorrectos, lo cual, por regla general, también dará lugar a un fallo protector, sin embargo, será menester un previo análisis del contenido del asunto para llegar a concluir la mencionada incorrección. Por virtud de esa nota distintiva, los efectos de la concesión del amparo, tratándose de una resolución jurisdiccional, son igualmente diversos en uno y otro caso, pues aunque existe un elemento común, o sea, que la autoridad deje insubsistente el acto inconstitucional, en el primer supuesto será para que subsane la irregularidad expresando la fundamentación y motivación antes ausente, y en el segundo para que aporte fundamentos y motivos diferentes a los que formuló previamente. La



apuntada diferencia trasciende, igualmente, al orden en que se deberán estudiar los argumentos que hagan valer los quejosos, ya que si en un caso se advierte la carencia de los requisitos constitucionales de que se trata, es decir, una violación formal, se concederá el amparo para los efectos indicados, con exclusión del análisis de los motivos de disenso que, concurriendo con los atinentes al defecto, versen sobre la incorrección de ambos elementos inherentes al acto de autoridad; empero, si han sido satisfechos aquéllos, será factible el estudio de la indebida fundamentación y motivación, esto es, de la violación material o de fondo.”⁷

“En virtud de lo antes expuesto, se puede determinar que la fundamentación y motivación que debe dar la autoridad a todo acto comprende lo siguiente: (i) la indicación precisa de los preceptos legales que la facultan para emitir el acto de autoridad; (ii) la argumentación racional mediante la cual se demuestre la actualización del supuesto jurídico, que en el caso concreto fundamenta su competencia; (iii) la indicación precisa de los preceptos legales en los cuales se funda la autoridad para afectar la esfera de los particulares a través de un determinado acto de molestia; y (iv) la argumentación lógico-jurídica tendiente a demostrar que el particular se encuentra en el supuesto de la

⁷ Novena Época; SJF; Tomo XXVII; Jurisprudencia: I.3o.C. J/47; TERCER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; Registro digital: 170307; página 1964.

norma que la autoridad pretende aplicar afectando así la esfera del particular.

“En ese orden, resulta claro que existen dos maneras en las que la autoridad puede incumplir con el mandato previsto en el artículo 16 constitucional: La primera, ausencia de fundamentación y motivación, la cual se actualiza en todos aquellos casos en los que la autoridad es totalmente omisa en señalar los fundamentos legales en los que se apoya la competencia de la autoridad para emitir el acto, y/o en los que se apoya la determinación adoptada dentro del mismo; así como las razones de hecho que llevaron a la autoridad a actuar en ese sentido. La segundo, **indebida fundamentación y motivación**, la cual se actualiza cuando la autoridad, a pesar de señalar los fundamentos y los argumentos que apoyan su determinación, **realiza una incorrecta interpretación de las normas invocadas, o en su caso, una incorrecta apreciación de los hechos, que se traduce en una determinación que carece de sustento.**

“Lo anterior, tal y como se desprende de la siguiente jurisprudencia emitida por nuestros más altos Tribunales:

“FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INDEBIDA.- Debe distinguirse entre la falta y la indebida fundamentación y motivación;

toda vez que por lo primero se entiende la ausencia total de la cita de la norma en que se apoya una resolución y de las circunstancias especiales o razones particulares que se tuvieron en cuenta para su emisión; mientras que la diversa hipótesis se actualiza cuando en la sentencia o acto se citan preceptos legales, pero no son aplicables al caso concreto y se exponen las razones que la autoridad tuvo para dictar la resolución, pero no corresponden al caso específico, objeto de decisión, o bien, cuando no existe adecuación entre los motivos invocados en el acto de autoridad y las normas aplicables a éste.”⁸

“Congruencia y Exhaustividad. Por su parte, la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos reconoce en sus artículos 14 y 16, el principio de Congruencia, el cual contiene dos vertientes, la congruencia interna y externa, a saber, la primera de las vertientes se refiere a que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos, mientras que la segunda se refiere a que la Resolución emitida tendrá que basarse en todas y cada una de las cuestiones planteadas por las partes, sin omitir ningún punto, así como tampoco puede introducir cuestiones no alegadas por las partes.

“El principio antes descrito también fue establecido en el Código de Comercio por el

⁸ Novena Época; SJF; Tomo XXV, Jurisprudencia; I.6o.C. J/52; SEXTO TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL PRIMER CIRCUITO; Registro digital: 173565; página 2127.

legislador en el artículo 1077, el cual establece lo siguiente:

“Artículo 1077.- Todas las resoluciones sean decretos de trámite, autos provisionales, definitivos o preparatorios y sentencias interlocutorias deben ser claras, precisas y congruentes con las promociones de las partes, resolviendo sobre todo lo que éstas hayan pedido. Cuando el tribunal sea omiso en resolver todas las peticiones planteadas por el promovente de oficio o a simple instancia verbal del interesado, deberá dar nueva cuenta y resolver las cuestiones omitidas dentro del día siguiente. Las sentencias definitivas también deben ser claras, precisas y congruentes con las demandas y las contestaciones y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito, condenando o absolviendo al demandado, y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate. Cuando estos hubieren sido varios, se hará el pronunciamiento correspondiente a cada uno de ellos. [...]”

(Énfasis añadido)

“El artículo anterior, claramente reconoce el principio de congruencia interna, aplicado específicamente para la Materia Mercantil, razón por la cual, los Jueces de la Materia además de la obligación Constitucional a la que se encuentran obligadas todas las autoridades que ejerzan formal o materialmente funciones jurisdiccionales consistente en garantizar el principio de legalidad, también tienen una obligación legal derivada del Código que regula su actuar.



“Sirven de sustento para lo anterior, el siguiente criterio emitido por los Tribunales Colegiados de Circuito:

“SENTENCIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE ESTUDIAR LAS EXCEPCIONES OPUESTAS NO CONTENIDAS EN EL APARTADO ESPECÍFICO, VIOLA EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA.- El principio de congruencia supone que las sentencias se ajusten a la litis planteada, siendo que hay dos clases de congruencia: la interna y la externa, la primera consiste en que la sentencia no contenga resoluciones ni afirmaciones que se contradigan entre sí o con los puntos resolutivos, mientras que la segunda exige que la sentencia haga ecuación con los términos de la litis, es decir, las resoluciones examinarán todos y cada uno de los puntos controvertidos, lo que significa que en toda sentencia debe observarse que se dicte atento a lo planteado por las partes, sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer por los que controviertan. En materia mercantil dicho principio de congruencia en el ámbito externo se encuentra previsto en el artículo 1077, así como en el diverso 1327 del Código de Comercio, de aplicación supletoria al juicio oral mercantil en términos del artículo 1390 Bis 8 del referido ordenamiento. Ahora bien, del análisis al artículo 1399 del citado código, se advierte que basta que en el escrito de contestación de demanda se planteen las excepciones que se estimen convenientes, para efectos de valorarlas al dictar la sentencia definitiva, sin importar que se contengan en un apartado específico del libelo; considerando que el escrito de contestación a una demanda es un todo, por lo que ha de examinarse en su integridad, de manera que si de su lectura se desprende la existencia de alguna excepción planteada por la parte demandada, el juzgador debe analizarla, pues ésta indudablemente

forma parte de la litis y, por tanto, es ilícito concretarse a estudiar solamente las opuestas bajo el capítulo así denominado, ya que se violaría el principio de congruencia externa, lo que ocasionaría, a su vez, vulnerar los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica consagrados en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.”⁹

“De igual forma, por lo que hace al principio de exhaustividad, resulta aplicable lo dispuesto en el criterio jurisprudencial que se transcribe a continuación.

“CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADAS EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ESTOS PRINCIPIOS.- Los principios de congruencia y exhaustividad que rigen las sentencias en amparo contra leyes y que se desprenden de los artículos 77 y 78 de la Ley de Amparo, están referidos a que éstas no sólo sean congruentes consigo mismas, sino también con la litis y con la demanda de amparo, apreciando las pruebas conducentes y resolviendo sin omitir nada, ni añadir cuestiones no hechas valer, ni expresar consideraciones contrarias entre sí o con los puntos resolutivos, lo que obliga al juzgador, a pronunciarse sobre todas y cada una de las pretensiones de los quejosos, analizando, en su caso, la constitucionalidad o inconstitucionalidad de los preceptos legales reclamados.”¹⁰

“De lo anterior, se advierte que los Jueces en Materia Mercantil se encuentran obligados a estudiar todos y cada uno de los puntos de la

⁹ Décima Época; SJF; Tomo III; Tesis Aislada; VI.1o.C.69 C (10a.); PRIMER TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL DEL SEXTO CIRCUITO; Registro digital: 2009157, página 2355.

¹⁰ Novena Época; SJF; Tomo XXI, Jurisprudencia: 1a./J. 33/2005; Primera Sala; Registro digital: 178783; página 108.



demanda y contestación de misma, sin que se pueda pasar por alto punto algo, pues todos los elementos aportados por las partes constituyen un todo, y los juzgadores se encuentran legal y constitucionalmente obligados a estudiar todas y cada uno de los puntos sometidos a su consideración, sin omitir ninguna cuestión.

“Fundamentos Legales Aplicables al caso que nos ocupa.

“Prórroga de Competencia en el Código de Comercio.

“Por regla general, los artículos 78, 1120, 1092 y 1093, del Código de Comercio, establecen que en virtud del acuerdo entre las partes, la competencia por razón del territorio es prorrogable, lo que significa que se otorga competencia para conocer de un negocio a un órgano que originalmente carecía de ella; es decir, se traslada el conocimiento de un juicio mercantil a un juez que, inicialmente carecía de atribuciones.

““Artículo 78.- En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.””

““Artículo 1120.- La jurisdicción por razón del territorio y materia son las únicas que se pueden prorrogar, salvo que correspondan al fuero federal.””

“Artículo 1092.- Es juez competente aquel a quien los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente.”

“Artículo 1093.- Hay sumisión expresa cuando los interesados renuncien clara y terminantemente al fuero que la ley les concede, y para el caso de controversia, señalan como tribunales competentes a los del domicilio de cualquiera de las partes, del lugar de cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o de la ubicación de la cosa. En el caso de que se acuerden pluralidad de jurisdicciones, el actor podrá elegir a un tribunal competente entre cualquiera de ellas.”

“(Énfasis añadido)

“De lo expuesto se desprende que la competencia territorial es prorrogable, toda vez que las partes de un acto jurídico pueden decidir quién será competente para conocer de sus pretensiones para el caso de controversia, sometiéndose a los tribunales de un determinado lugar, a través del pacto de sumisión.

“En el pacto de sumisión, los interesados manifiestan su voluntad en forma expresa, para que los tribunales de un determinado lugar sean competentes para conocer de un litigio futuro o presente; sin embargo, para que se configure esa sumisión expresa, las partes deben renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes. De la misma forma, se establece que el Juez competente será aquél al que los litigantes se hubieren sometido expresa o tácitamente.



“Casos de excepción a la prórroga de competencia.

“También es cierto, que existen diversas excepciones a este principio, **específicamente, las establecidas** por la **Jurisprudencia** de rubro *“COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA”*, específicamente cuando (i) dicha sumisión se haya pactado en un Contrato de Adhesión - Conforme a la Ley CONDUSEF, (ii) que dicha sumisión se encuentre fuera del domicilio del Usuario de Servicios Financieros, y (iii) que se trate de un juicio oral mercantil o bien, un juicio ejecutivo oral, pues la contradicción de tesis que dio lugar a la jurisprudencia antes citada, deriva precisamente de procedimientos orales mercantiles.

“Sobre los Contratos de Adhesión.

“El contrato bancario de adhesión se encuentra sujeto a las disposiciones normativas que lo regulan, entre las que destacan (i) la Ley de Instituciones de Crédito (**“LIC”**); (ii) Ley para la Transparencia y Ordenamiento de los Servicios Financieros (**“LTOSF”**); (iii) Ley de Protección

y Defensa al Usuario de Servicios Financieros ("Ley CONDUSEF"); (iv) Disposiciones de carácter general en materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito y Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas, emitidas por la CONDUSEF, entre otras.

“En términos de lo establecido por la LTOSF y las Disposiciones de carácter general en materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas, emitidas por la CONDUSEF, el contrato de adhesión bancario puede definirse como el documento elaborado unilateralmente por las Instituciones Financieras para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la celebración masiva de operaciones pasivas, activas o de servicios que lleven a cabo con los Usuarios, en el entendido de que estos últimos no podrán negociar dichos términos y condiciones.

“Se destaca que, como bien lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la Contradicción de Tesis 192/2018 *“los contratos de adhesión son una respuesta a la necesidad de tutelar jurídicamente relaciones masivas de consumo en las que el consumidor acepta una serie de obligaciones y derechos sin incidir de forma*



alguna en su elaboración. Por ende, satisfacen una necesidad económica al mejorar la eficiencia de las relaciones comerciales, pues i) reducen los costos de transacción, ii) contribuyen a la racionalización de la empresa y iii) incrementan la seguridad jurídica."

"Siguiendo el razonamiento consistente en que los contratos de adhesión regulan jurídicamente las relaciones masivas de consumo, la CONDUSEF emitió las Disposiciones de carácter general en materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas, que fueran publicadas en el Diario Oficial de la Federación el 30 de octubre de 2014, en las que se establecen entre otras cosas (i) cuáles serán consideradas operaciones masivas; y, (ii) cuáles contratos requerirán autorización previa de la CONDUSEF para la celebración de sus operaciones y servicios financieros.

"En razón de lo anterior, en el artículo 3º de las citadas Disposiciones de carácter general, se establece que se considerarán masivos aquellos contratos que documenten operaciones inferiores a 900,000 Unidades de inversión¹¹ ("UDI") -es decir, \$5'835,142.80

¹¹ \$6.483492 pesos - Valor de la Unidad de inversión al 16 de julio de 2020.

(Cinco millones ochocientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.).

“CAPÍTULO II. DE LOS CONTRATOS DE ADHESIÓN

“SECCIÓN I. DISPOSICIONES COMUNES

“Artículo 3. Se consideran operaciones masivas y, por tanto, serán las únicas sujetas a lo previsto en este Capítulo, las que se realizan mediante los siguientes tipos de Contratos de Adhesión que documenten operaciones que no excedan de novecientas mil UDI al momento de celebrar el contrato:

“I. Las aperturas de créditos en cuenta corriente, denominadas en moneda nacional, otorgadas a personas físicas o morales vinculadas o no a tarjetas de crédito o a cualquier otro Medio de Disposición que permita ejercer el crédito;

“II. Las líneas de crédito que se otorguen de manera sucesiva o en serie y utilicen alguna tarjeta plástica u otro Medio de Disposición como medio de identificación de los Usuarios, o bien, para la disposición de los recursos;

“III. Los créditos garantizados a la vivienda;

“IV. Las aperturas de Créditos al Consumo;

“V. El arrendamiento financiero con opción terminal de compra;

“VI. Los depósitos de dinero a la vista, tanto de personas físicas como morales con o sin chequera, con o sin tarjeta de débito;

“VII. Las operaciones pasivas distintas a las previstas en la fracción anterior, a las cuales les es aplicable la GAT nominal y real;

“VIII. El crédito de habilitación o avío;

“IX. El crédito refaccionario;

“X. El crédito simple a personas morales;

“XI. Las operaciones de factoraje financiero, y

“XII. Las operaciones de banca electrónica.

“Las operaciones documentadas en Contratos de Adhesión a que se refieren las fracciones I, II, IV, VI, y VII cuyo monto reclamado no

exceda de cincuenta mil UDI, se deben sujetar al procedimiento de aclaraciones, establecido en el artículo 23 de la Ley para la Transparencia.””

[Énfasis añadido]

“En efecto, de una interpretación contrario sensu del artículo transcrito, podemos concluir válidamente que aquellas operaciones superiores a un valor de \$5'835,142.80 [Cinco millones ochocientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.], no constituyen contratos de adhesión masivos, luego entonces, no se encuentran sujetos a los supuestos normativos contenidos en el Capítulo II de las multicitadas Disposiciones de carácter general.

“Sobre los juicios Orales Mercantiles:

“Tal como sus Señorías podrá advertir, la Jurisprudencia de rubro “COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA”, invocada por las Autoridades Responsables, deriva de juicios orales mercantiles¹², mismos que por su

¹² “... Una vez precisado lo anterior, esta Primera Sala considera que también se actualiza el tercer requisito, en torno a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión

propia y especial naturaleza requieren ciertas formalidades mismas que a continuación se desarrollan:

"A saber, El 18 de junio de 2008, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el decreto por el que se reforman diversos artículos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos para incorporar el sistema adversarial penal. La aprobación de esta reforma tuvo como finalidad el mejorar el funcionamiento de las diferentes instituciones que integran el sistema de justicia penal en México, encargadas de la seguridad pública, la procuración e impartición de justicia, así como de la reinserción social.¹³

"Con la anterior reforma se abrió el camino para diversos cambios constitucionales aprobados al sistema de justicia penal

jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible; pues en el caso se considera oportuno, en aras de la seguridad jurídica, clarificar cuál es la autoridad competente para conocer de juicios orales mercantiles, en caso de que los suscriptores de los contratos de servicios bancarios fundatorios de la acción estipulen la renuncia al fuero que la ley concede con base en la sumisión expresa a que alude el artículo 1093 del Código de Comercio...."

¹³ **DECRETO** por el que se reforman los artículos Transitorios Segundo; primer párrafo del artículo Tercero; primer párrafo del artículo Cuarto, y artículo Quinto; se adicionan los párrafos segundo y tercero al artículo Segundo Transitorio del "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles", publicado en el Diario Oficial de la Federación el 25 de enero de 2017 consultable en <http://www.diputados.gob.mx/sedia/biblio/prog.leg/Prog.leg.LXIII/214> **DOF** 28mar18.pdf



mexicano, uno de los que destaca en el subsistema de impartición de justicia, es el relativo a la introducción de los juicios orales.

“La introducción de los juicios orales implica una modificación de los diferentes componentes que integran el sistema de justicia penal, en virtud de la sustitución del modelo penal mixto por uno predominantemente acusatorio y oral, regido por los principios procesales de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación¹⁴.

“Como inercia de la reforma penal, posteriormente se realizaron modificaciones constitucionales para que las legislaciones en materia procesal civil, familiar, mercantil y laboral, transiten hacia la oralidad. En ese contexto, el 25 de enero de 2017, se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones del Código de Comercio, en materia de Juicios Orales Mercantiles. El referido decreto tiene una gran relevancia, especialmente porque se establecen las reglas procedimentales en las que se llevará a cabo los juicios mercantiles orales, desde la fijación de litis, las audiencias y pruebas, hasta la ejecución de sentencias.¹⁵

¹⁴ *IDEM SUPRA*

¹⁵ Bis *IDEM*

“A mayor abundamiento, el Código de Comercio, distingue entre el juicio ordinario mercantil y el juicio ejecutivo mercantil oral, siendo la principal diferencia que el segundo deriva de un juicio que tiene aparejada ejecución, sin embargo, para efectos del presente capítulo ambos serán referidos como Juicio Oral, pues, la *ratio* de la jurisprudencia citada por las Autoridades Responsables, fue evitar hacer que los justiciables tuvieran que contratar una defensa que necesariamente tuviera que asistir a audiencias orales en un fuero distinto al que residen.

“El Juicio Oral Mercantil es un Juicio Mixto, toda vez que la demanda, la contestación, la reconvención, la contestación a la reconvención se formulan por escrito. La fase procesal de ofrecimiento de Pruebas queda integrada en los escritos de demanda, de contestación, de desahogo de la vista con las excepciones, con la demanda reconvencional, con la contestación a la demanda reconvencional y el desahogo de la vista con las Excepciones que en su caso se hubieren formulado al contestar la demanda reconvencional.”¹⁶

¹⁶ Mondragón Pedrero, Alberto Fabián, "El Juicio Oral Mercantil" (Página 1), Facultad de Derecho UNAM, consultable en: https://www.derecho.unam.mx/investigacion/publicaciones/revista_cultura/pdf/CJ4_Art_8.pdf



“El juicio Oral Mercantil, es regido por los principios de Oralidad, publicidad, igualdad, inmediación, contradicción, continuidad y concentración, mismos que se describen a continuación¹⁷:

“- Oralidad: Predominan las actuaciones orales sobre las escritas;

“- Publicidad: El derecho que tienen las partes y los terceros de presenciar todas las diligencias y en especial las relativas a pruebas. Sin embargo, el derecho a examinar los autos no alcanza a los expedientes que con ellos guardan relación, ya que para ello, se requerirá una autorización especial del Juez;

“- Igualdad: Las partes deben

“- tener en el proceso un mismo trato, se les deben dar las mismas oportunidades para hacer valer su pretensión y ejercitar sus defensas, según el caso;

“- Inmediación: Consiste esencialmente en que el Juzgador esté en contacto personal con las partes, recibiendo los Medios de Prueba y en su caso escuchando los alegatos;

“- Contradicción: El Tribunal de a las partes la oportunidad de ser oídas en defensa de sus derechos, con la salvedad de que dicho principio no se viola cuando las citadas partes no aprovechan esa oportunidad;

¹⁷ IDEM Supra.

“- Continuidad: Las cuestiones litigiosas se deben formular ante el Juez o Magistrado desde su inicio y desarrollo en el proceso, siendo los mismos que pronuncien la Sentencia Definitiva, porque sólo ellos, están en condiciones de hacerlo con pleno conocimiento de causa;

“- Concentración: Deben reunirse todas las cuestiones litigiosas para ser resueltas todas ellas o el mayor número posible de las mismas en la Sentencia Definitiva, evitando que el curso del proceso en lo principal se suspenda.

“El Juicio Mercantil se integra por diversas etapas, siendo la primera, la integración de la litis, la cual es la única preponderantemente escrita; seguida por la Audiencia Preliminar; Audiencia de Juicio y Sentencia, mismas que se detallan a continuación:

“- Integración de la litis: Inicia con una demanda por escrito, contestación y desahogo de vista con excepciones y defensas, igualmente por escrita, integrada la litis, se señala fecha para el desahogo de la audiencia preliminar;

“- Audiencia Preliminar: La Audiencia Preliminar en el Juicio Oral Mercantil debe cumplir con los siguientes objetivos: (i) Depuración del procedimiento -Momento procesal en el cual se reciben o desahogan los medios de prueba, respecto de las excepciones

procesales (artículo 1122 del Código de Comercio), dictándose la resolución que en derecho corresponda -, (ii) La conciliación y/o mediación de las partes por conducto del Juez, (iii) La fijación de acuerdos sobre hechos no controvertidos, (iv) Fijación de acuerdos probatorios, y (v) Admisión de Pruebas.¹⁸;

“- Audiencia de juicio: En la Audiencia del Juicio se procede al desahogo de las pruebas que se encuentran debidamente preparadas en el orden que el Juez estime pertinente, al efecto, el Juzgador contará con las más amplias facultades como rector del procedimiento, con la novedad que se dejarán de recibir los Medios de Prueba que no se encuentren preparados, considerándose que es por causa imputable al oferente; Recibidos los Medios de Prueba se concederá el uso de la palabra por una vez a cada una de las partes, y por un máximo de quince minutos para formulación de alegatos. Concluida dicha fase procesal el Juez deberá declarar el asunto visto y citará a las partes para la continuación de la Audiencia dentro del término de los diez días siguientes en los que se dictará la Sentencia correspondiente¹⁹.

“- Sentencia: El Juez tiene la obligación de exponer oralmente y en forma breve los

¹⁸ BIS IDEM (PP. 12-14)

¹⁹ TER IDEM (P. 14)

fundamentos de hecho y de derecho que motivaron su Sentencia y leerá únicamente los puntos resolutivos. Acto seguido queda a disposición de las partes copia de la Sentencia. Lo anterior, se fundamenta en el artículo 1390 bis 39 del Código de Comercio y en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos²⁰.

“En este entendido, podemos concluir que los juicios orales solo son aquellos regulados por el Título Especial del Código de Comercio relativo al juicio Oral mercantil, en el cual, prevalecen las actuaciones orales y por tanto presenciales de los justiciables. En estos términos, se debe reiterar que la prórroga de competencia pactada por las partes será válida y aplicable, siempre y cuando no sobrevenga alguna de las excepciones desarrolladas, entre ellas, (i) que se haya pactado en un contrato de adhesión, y (ii) que derivado de dicho contrato de adhesión se promueva juicio oral mercantil.

“II. Contrario a lo anterior, la Juez Responsable, sin estudiar todas y cada una de las cuestiones de la acción, así como el Agravio Único formulado por [REDACTED] determinó que el contrato base de la acción en efecto era un contrato de adhesión, y por tanto, operaba la jurisprudencia invocada por el Juez

²⁰ IDEM SUFRA



Responsable, misma que establece que, a los contratos de adhesión, no les es aplicable el artículo 1093 del Código de Comercio, en los siguientes términos:

“(…)

“Consecuentemente, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, lo cierto es que tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio.

“Dicho criterio es del tenor siguiente:

“COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1093 y 1120 del Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable, en atención a que las partes de un acto jurídico pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar a través del pacto de sumisión, mediante el cual los interesados manifiestan su voluntad en forma expresa. Sin embargo, para que se configure esa sumisión, necesariamente debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de

tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa. Ahora, si bien es cierto que en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos –entre los que se encuentran los contratos de adhesión de prestación de servicios bancarios–; también lo es que esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual. Efectivamente, constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por tales actividades. Por lo anterior, resulta lógico y razonable estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, máxime si estamos en presencia de un contrato mercantil de adhesión cuyos términos no resultan negociables. Consecuentemente, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, lo cierto es que tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio, siempre

y cuando también se proteja el interés de la institución crediticia demandada, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se desenvuelva la controversia.”²¹

“En la especie, del contrato exhibido como base de la acción en el juicio de origen, se observa que se trata de un contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, el cual, adverso a lo aseverado por el recurrente, se considera un contrato de adhesión.

“Es así, porque un contrato bancario puede considerarse como la relación que se establece entre una entidad financiera y cualquiera de sus clientes por la que surgen una serie de obligaciones para las partes y que guarda relación con los productos y servicios ofrecidos por dicha entidad. Generalmente, los contratos bancarios son redactados por las entidades financieras, que incorporan idénticas “Condiciones generales y particulares” para todos los clientes que los suscriben y sobre las cuales estos últimos tienen un margen de negociación escaso o nulo, lo que los convierte en contratos de adhesión.

“Pues bien, en el caso se advierte que en el documento basal los obligados no tuvieron la facultad de negociar los términos del acuerdo, aun cuando hubiesen leído y entendido los términos del mismo y desearan negociar la modificación de algunas de sus cláusulas, ya que carecen de la posibilidad para efectuar dichos cambios, lo que constituye una característica común de los contratos de adhesión.

“Además, reúne las características de haber sido elaborado unilateralmente por la institución crediticia recurrente, ya que contiene un clausulado general preredactado, pues se especifican los datos particulares del crédito, así como de los obligados; tales como

²¹ Décima Época; SJF; Tomo I; Jurisprudencia: 1a./J. 1/2019 (10a.); Primera Sala; Registro digital: 2019661; página 689.

forma de disposición, el plazo máximo de disposición del crédito, el monto, el tipo de moneda, las tasas aplicables -ordinaria y moratoria-, el importe de la línea de crédito, los nombres de los obligados.

“Por esto, se actualiza el supuesto establecido por el Más Alto Tribunal de Justicia del país, en cuanto a que, a los contratos bancarios de adhesión no es aplicable el pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, ya que constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por tales actividades. Lo que conlleva a que en caso de controversia, no deba obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, si se está en presencia de un contrato mercantil de adhesión cuyos términos no resultan negociables, como es el caso.

“Aunado a que de los datos específicos que obran en el contrato bancario de adhesión exhibido como documento base en el juicio de origen, se aprecia que la parte demandada señaló que su domicilio estaba ubicado en Irapuato, Guanajuato.

“Lo que evidencia que se trata de un contrato bancario de adhesión, en el cual, los codemandados tienen su domicilio en el Estado de Guanajuato.

“No obstante, en el contrato de adhesión basal se estipuló una cláusula de sumisión a los Tribunales de la Ciudad de México, lo que revela que en momento alguno fue considerado como parámetro el lugar donde se encuentra el domicilio de los presuntos demandados.

“Por lo anterior se determina que, como bien lo refirió el A quo, no puede considerarse válida la cláusula de sumisión expresa



señalada en el contrato de adhesión exhibido como base en el juicio de origen, pues ante el desequilibrio contractual en que se encuentran, debe prevalecer la interpretación contraria al estipulante y favorable al usuario adherente.

“Por otra parte, resultan inoperantes los motivos de inconformidad 1 y 2, en los que esencialmente se sostiene que el A quo es competente para conocer del asunto, en razón del domicilio estipulado en el contrato para el caso de controversia y porque el domicilio de la Institución Financiera -actora- se encuentra en la Ciudad de México.

“Lo anterior, porque tales argumentos compiten con lo expresado por la Primera Sala de la Suprema Corte de justicia de la Nación en la jurisprudencia transcrita en párrafos precedentes, en la que se estableció que si bien en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos -entre los que se encuentran los contratos de adhesión de prestación de servicios bancarios-; lo cierto es que esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, como en el particular acontece. Cobra aplicación al caso la jurisprudencia 1a./J. 14/976, de rubro y texto: “AGRAVIOS INOPERANTES. INNECESARIO SU ANÁLISIS CUANDO EXISTE JURISPRUDENCIA. Resulta innecesario realizar las consideraciones que sustenten la inoperancia de los agravios hechos valer, si existe jurisprudencia aplicable, ya que, en todo caso, con la aplicación de dicha tesis se da respuesta en forma integral al tema de fondo planteado.”

“(…)”

“En estos términos, el Magistrado Responsable, sustancialmente determinó (i) que el Contrato Base de la Acción se trata de

un contrato de adhesión en términos de la Ley CONDUSEF, y (ii) que por tanto [REDACTED] y [REDACTED] no pudieron prorrogar válidamente la competencia para conocer del asunto, lo anterior, perdiendo de vista ciertos fundamentos de derecho, así como los documentos base de la acción, y el agravio formulado por HSBC.

“III. Contrario a lo determinado por el Magistrado Responsable, a continuación se demostrará que, (i) que el contrato base de la acción no es un contrato de adhesión, en virtud de no pacta operaciones masivas; (ii) por tanto el Juez Responsable, y el Magistrado Responsable, aplicaron indebidamente la Jurisprudencia transcrita en la Sentencia Reclamada, y (iii) que se aplicó indebidamente dicha jurisprudencia, así como la Ley CONDUSEF, no obstante [REDACTED], formuló agravios que explicaban por qué no eran aplicables, máxime que existían elementos objetivos para determinar lo contrario.

“A mayor abundamiento, tal como se explicó en la premisa mayor del presente concepto de violación, en la especie la sumisión a la Jurisdicción y competencia del juez de la Ciudad de México pactada por las partes es válida y exigible, en tanto que, (i) se renunció al fuero que correspondía a la parte demandada, (ii) no aplica excepción alguna de

general en materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas, es decir, mayor a \$5'835,142.80 (Cinco millones ochocientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.), por lo que no se encuentra sujeto a los supuestos normativos contenidos en el Capítulo II de las multicitadas Disposiciones de carácter general, al no constituir una operación masiva.

“Ahora, el Magistrado Responsable desestimó lo anterior, argumentando que, aunque se exceda la cuantía determinada por el artículo 3º de las Disposiciones de carácter general en materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas, es decir, mayor a \$5'835,142.80 (Cinco millones ochocientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.), en virtud de que a su consideración, el Contrato, reúne las características en un contrato de adhesión, pues consideró que el acreditado no estuvo en libertad de negociar libremente las cláusulas, basando lo anterior en el artículo 56 de la Ley CONDUSEF.

“Lo anterior, resulta, igualmente indebidamente fundado y motivado, pues, un contrato de adhesión, necesariamente tiene que ser



revisado y posteriormente registrado en el RECA de CONDUSEF, tal como lo establecen los artículos 56 Bis, 57, 59 Bis y 59 Bis 1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

“En estos términos, se advierte que CONDUSEF, tiene un procedimiento para registrar, y revisar los contratos de adhesión presentados por las instituciones de crédito, razón por la cual, no cualquier contrato emitido por una institución de crédito, como lo define el Magistrado Responsable, es un Contrato de Adhesión.

“En términos de lo anterior, del análisis del Contrato base de la acción - del cual fue completamente omiso el Magistrado Responsable - se advierte que (i) la cuantía del crédito excede la cantidad determinada por el artículo 3º de las Disposiciones de carácter general en materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas, es decir, mayor a \$5'835,142.80 (Cinco millones ochocientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.), (ii) se trata de un crédito empresarial, no así de persona física, y (iii) al no constituir una obligación para mi mandante en razón de la cuantía y el tipo de crédito, no

se advierte número o folio alguno otorgado por el [REDACTED] de CONDUSEF.

“Contrario a lo anterior, el Magistrado Responsable, se limitó a decir que [REDACTED] no pudo negociar libremente sus términos, porque *“generalmente los contratos de crédito de los bancos no lo permiten”*, lo anterior, es completamente falso, pues confunde, otra vez los contratos de adhesión, con los contratos de banca empresarial, como en la especie nos ocupa.

“Por tanto, ha quedado plenamente acreditado que el contrato base de la acción no se trata de un contrato de adhesión, al [i] exceder la cuantía determinada por el artículo 3º de las Disposiciones de carácter general en materia de Transparencia aplicables a las instituciones de Crédito Sociedades Financieras de Objeto Múltiple, Entidades Reguladas, es decir, mayor a \$5'835,142.80 (Cinco millones ochocientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 80/100 M.N.), (ii) tratarse de un crédito empresarial, no así de persona física, y (iii) al no constituir una obligación para mi mandante en razón de la cuantía y el tipo de crédito, no se advierte número o folio alguno otorgado por el RECA de CONDUSEF.

“Vía Procedente para tramitar la controversia entre [REDACTED] y [REDACTED]”



“En la especie, tal como sus Señorías podrán advertir, procede la vía ejecutiva mercantil tradicional, en términos de los artículos 1390 Ter aplicado a *contrario sensu*, así como el artículo 1391 fracción X del Código de Comercio, razón por la cual se advierte que en la especie no se están frente a un juicio ejecutivo mercantil, como en los supuestos de excepción narrados con antelación.

“Validez de la prórroga de competencia e inaplicabilidad de la jurisprudencia invocada por las Autoridades Responsables.

“Toda vez, que como quedó acreditado en líneas anterior, el contrato base de la acción, no se trata de un Contrato de Adhesión, le son aplicables las reglas de competencia previstas en el Código de Comercio, a saber por los artículos 1120, 1092 y 1093, del Código de Comercio, mismos que establecen que en virtud del acuerdo entre las partes, la competencia por razón del territorio es prorrogable, lo que significa que se otorga competencia para conocer de un negocio a un órgano que originalmente carecía de ella; es decir, se traslada el conocimiento de un juicio mercantil a un juez que, inicialmente carecía de atribuciones.

“En el presente caso, es evidente y claro que hubo una sumisión expresa a la competencia de los Tribunales de la Ciudad de México, no

sólo atendiendo al acuerdo de voluntades que se encuentra amparado con el contrato bancario de adhesión suscrito por las partes, sino que también en razón de la primera vertiente señalada anteriormente, es decir, en el domicilio de cualquiera de las partes, entendiendo que el domicilio señalado por la [REDACTED] a carátula del contrato es el ubicado en [REDACTED] [REDACTED] delegación Cuauhtémoc, Ciudad de México. Código Postal 06500.

“Ahora bien, bajo el razonamiento expuesto por el Magistrado Responsable, cuando las personas morales no ofrecen sus servicios únicamente dentro de la jurisdicción territorial en donde se ubica su administración, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, en caso de controversia, a estas sociedades no les aplica la regla de sumisión expresa siendo entonces que debe de tenerse como domicilio para la jurisdicción el de la sucursal indicada en virtud de que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 33 del Código Civil Federal, las sucursales que operen en lugares distintos de donde radique la matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales, tal y



como se desprende de la siguiente transcripción:

“Artículo 33.- Las personas morales tienen su domicilio en el lugar donde se halle establecida su administración.

“Las que tengan su administración fuera del Distrito Federal pero que ejecuten actos jurídicos dentro de su circunscripción, se considerarán domiciliadas en este lugar, en cuanto a todo lo que a esos actos se refiera.

“Las sucursales que operen en lugares distintos de donde radica la casa matriz, tendrán su domicilio en esos lugares para el cumplimiento de las obligaciones contraídas por las mismas sucursales.”

“(Énfasis añadido)”

“Sin embargo, es imperativo hacer una interpretación sistemática normativa en cuanto a que hay un sometimiento expreso de las partes a una jurisdicción en virtud de la celebración del contrato bancario, atendiendo a lo establecido por el artículo 78 del Código de Comercio, que es la máxima en cuanto a respetar e interpretar correctamente la voluntad de las partes.

“Artículo 78.- En las convenciones mercantiles cada uno se obliga en la manera y términos que aparezca que quiso obligarse, sin que la validez del acto comercial dependa de la observancia de formalidades o requisitos determinados.”

“[Énfasis añadido]

“Luego entonces, a pesar de que mi representada cuenta con diversas sucursales a lo largo del todo el territorio nacional, lo anterior no es razón suficiente para suponer que la competencia en caso de controversia se

regirá única y exclusivamente por el lugar en donde se encuentra esa sucursal y en donde se celebró el contrato bancario, sino que siempre se debe atender a la voluntad de las partes que se sometieron al clausulado expreso de ese contrato, dentro de lo cual se encuentra el sometimiento expreso a la jurisdicción de los Tribunales de la Ciudad de México.

“Aunado a lo anterior, en vista de que no es suficiente argumentar el domicilio de la sucursal para establecer una competencia en razón de territorio por ser en donde se encuentra esta última, es el caso que el contrato sobre el cual versa el presente asunto en la vía ejecutiva mercantil, no trata de un contrato de adhesión y, por lo tanto, no es aplicable la Jurisprudencia 1/2019 (10a) invocada por las Autoridades Responsables.

“No debe pasar desapercibido, que la jurisprudencia invocada por las Autoridades Responsables, deriva de una contradicción de tesis, en la cual se buscaba determinar la fijación de la competencia para juicios orales mercantiles²², que en ese momento era de

²² “...Una vez precisado lo anterior, esta Primera Sala considera que también se actualiza el tercer requisito, en torno a la formulación de una pregunta genuina acerca de si la manera de acometer la cuestión jurídica es preferente con relación a cualquier otra que, como la primera, también sea legalmente posible”; pues en el caso se considera oportuno, en aras de la seguridad jurídica, clarificar cuál es la autoridad competente para conocer de juicios orales mercantiles, en caso de que



cuantía menor, por lo cual, la Suprema Corte de Justicia de la Nación, determinó que era un abuso hacer que las partes que demandaban a instituciones de crédito cantidades de por sí menores, tuvieran que litigar fuera de su domicilio, sin que esto sea aplicable al caso en concreto, pues en la especie, [REDACTED], adeuda a [REDACTED] más de \$15'000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), razón por la cual, además de que el contrato base de la acción no es de adhesión, no es aplicable la jurisprudencia multicitada al caso en concreto.

“Omisión del Magistrado Responsable de tomar en consideración que el Juicio de origen se promovió en línea.

“Tal como se ha mencionado en líneas anteriores, la jurisprudencia de rubro “COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.” derivó de una contradicción de tesis, derivada de un juicio oral mercantil promovido por una persona

los suscriptores de los contratos de servicios bancarios fundatorios de la acción estipulen la renuncia al fuero que la ley concede con base en la sumisión expresa a que alude el artículo 1093 del Código de Comercio....”

física en contra de una Institución de Banca Múltiple.

“Lo anterior, cobra relevancia, por las siguientes diferencias (i) en los asuntos de los cuales deriva la jurisprudencia que nos ocupa, se advierte que fueron los ahorradores quienes promovieron juicios orales mercantiles en contra de las dos diferentes instituciones de banca múltiple, por concepto de devolución de cantidades; y (ii) los juicios orales mercantiles requieren de mayor actividad presencial de las partes, a diferencia del juicio ejecutivo mercantil escrito - como el que nos ocupa en el cual, las partes pueden desahogar prácticamente todas las actuaciones en el portal de servicios en línea del Poder Judicial Federal, incluso, la demanda que nos ocupa fue presentada por [REDACTED], en línea.

“Ahora, las diferencias antes citadas cobran relevancia, en virtud de que en los casos de los cuales derivó la jurisprudencia citada por el Magistrado Responsable, las partes demandaron de las instituciones de crédito, ciertas cantidades por cargos indebidos y/o indebidas disposiciones de la cuenta, mientras que en la especie, [REDACTED] otorgó a [REDACTED] un préstamo por la cantidad de \$15'000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), y es [REDACTED] quien tuvo que promover un juicio para recuperar dicha cantidad, que incluso fue



requerida en múltiples ocasiones por parte de [REDACTED]

“En estos términos, [REDACTED] es quien tendrá que erogar ciertos gastos para que alguno de los apoderados vaya a Irapuato a realizar la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento a Irapuato, Guanajuato, a [REDACTED]. Tanto el Magistrado, como el Juez Responsables fueron completamente omisos en considerar que sus determinaciones, irían en contrario al espíritu de la jurisprudencia que invocaron, pues en el especie, es [REDACTED] quien tuvo que acceder a la jurisdicción, en virtud de que [REDACTED] ha omitido cumplir con sus obligaciones de hacer.

“Por otra parte, el Magistrado Responsable, omitió tomar en consideración que desde el 12 de junio de 2020, las partes, pueden acceder a la jurisdicción desde cualquier computadora, a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura de la Federación, a través del cual, se pueden consultar todas y cada una de las actuaciones que obran en el expediente físico²³, así como promover las diversas promociones, interponer medios ordinarios de defensa, y hasta promover amparos directos e indirectos, razón por la cual, es falso que, la tramitación de un juicio ejecutivo mercantil en la Ciudad de México

²³ Acuerdo General 12/2020 artículo 3.

constituya una carga para una empresa como [REDACTED] quien ha incumplido sistemáticamente con sus obligaciones frente a [REDACTED] pues aunque el juicio se desahogue en la Ciudad de México, los abogados de [REDACTED], podrán actuar y revisar actuaciones desde el citado portal de servicios en línea.

“A mayor abundamiento, el Acuerdo General 12/2020, establece lo siguiente, respecto a la tramitación de juicios en línea:

*“**Artículo 10.** Las disposiciones contenidas en este Capítulo son aplicables a todos los asuntos que tramiten los Juzgados de Distrito, Tribunales de Circuito, Centros de Justicia Penal Federal y en los órganos jurisdiccionales federales del nuevo modelo de justicia laboral, con independencia de que en los Capítulos finales del presente Acuerdo se precisan algunos alcances para cada materia, de acuerdo con la legislación adjetiva que la rige.*

“En todos los servicios en línea que presta el CJF se utilizará la Firma Electrónica, salvo para la promoción de demandas electrónicas en términos del artículo 15 de la Ley de Amparo.”

*“**Artículo 11.** A través del Sistema Electrónico del PJJ, el CJF implementará la tramitación electrónica del juicio de amparo y, en general, de todos los asuntos competencia del PJJ, así como de las comunicaciones oficiales.”*

*“**Artículo 14.** El Portal de Servicios en Línea es un sitio web a través del cual las partes, sus representantes y, según sea el caso, sus autorizados, podrán acceder electrónicamente a las OCC y a los órganos jurisdiccionales para presentar solicitudes, demandas, recursos y promociones en general, así como para acceder a los expedientes electrónicos y*



notificarse electrónicamente de las resoluciones judiciales que se emitan en éstos.

“Las promociones de las partes recibidas en el Portal recibirán el mismo tratamiento que las presentadas en formato impreso, siempre que se cumpla con las disposiciones previstas en el presente Acuerdo General.

“El Portal de Servicios en Línea cuenta con los módulos para presentación de demandas, solicitudes y escritos iniciales, envío de promociones y recursos, acceso y consulta de expediente electrónico, generación de notificaciones, consulta de expedientes y lista de acuerdos. Los módulos del Sistema Electrónico del PJF deberán alojarse dentro de la infraestructura de almacenamiento y procesamiento de datos propiedad del CJF.

“Adicionalmente, en el Portal se establecerán los vínculos necesarios para que las personas justiciables tramiten su FÍREL y tengan acceso a la normativa que rige el sistema. También se podrá acceder al listado de las firmas electrónicas o certificados digitales emitidos por otros órganos del Estado con los cuales el PJF haya celebrado convenio de coordinación para el reconocimiento de certificados digitales homologados, en términos del artículo 5, párrafo segundo, del Acuerdo General Conjunto Número 1/2013.”

“**Artículo 15.** El Portal de Servicios en Línea funcionará las veinticuatro horas del día, todos los días del año.”

“**Artículo 16.** Para acceder a los servicios que se prestan en el Portal de Servicios en Línea será necesario que las personas interesadas cuenten con una firma electrónica emitida o reconocida por el PJF a través de la Unidad en términos de lo establecido en el último párrafo del artículo 14 del presente Acuerdo General y se registren en el sistema.

“Para registrarse en el Portal las personas usuarias deberán: (i) indicar su nombre, correo electrónico y CURP; (ii) crear un "Nombre de

Usuario" y una "Contraseña"; y (iii) vincular su Firma Electrónica al registro respectivo.

“El registro de cada usuaria o usuario en el sistema es de carácter personal y en ningún caso una persona podrá hacerlo a nombre de otra.”

“**Artículo 21.** En el Sistema Electrónico del PJF, el personal de los órganos jurisdiccionales, conforme a sus atribuciones, recibirá las solicitudes, incidentes, demandas, recursos y, en general, todas las promociones electrónicas, junto con sus anexos, acuses de recibo y boletas de turno electrónicas, tras lo cual integrarán el expediente electrónico, otorgarán los accesos para su consulta y los permisos para notificarse electrónicamente, y ordenarán la práctica de este tipo de notificaciones.”

“**Artículo 22.** Al integrar los expedientes electrónicos, los órganos jurisdiccionales los registrarán dentro de la misma numeración consecutiva que la empleada para los expedientes derivados de promociones que se presenten de manera impresa, y en ambos casos se dará el trámite correspondiente. Las constancias firmadas electrónicamente tienen validez legal suficiente, por lo que no será necesaria su posterior firma autógrafa ni una certificación para ser agregadas al expediente impreso respectivo, sino que bastará con que conste en ellas su evidencia criptográfica.

“Las y los servidores públicos autorizados para tal efecto, podrán emitir acuerdos mediante el uso de su FIREL para generar copias certificadas de lo que obra en un expediente y agregarlas en otro.

“Por su parte, las promociones recibidas físicamente deberán integrarse a un expediente electrónico mediante la utilización de la FIREL, atendiendo a lo dispuesto en el siguiente artículo.

“El expediente físico y el electrónico deberán contener las mismas constancias y documentos, guardando idéntico orden

cronológico. Los documentos presentados en físico con los que se formen cuadernos auxiliares y que no se agreguen al expediente principal físico, tampoco deberán integrarse al expediente electrónico. Se trata de los siguientes:

“I. Copias de traslado.

“II. Hojas en blanco, folders, micas o cualquier tipo de material sin leyenda relevante alguna, cuya presentación se aprecie encaminada a la protección de los documentos que se ingresan.

“III. Copias presentadas como "anexos" y que correspondan a actuaciones del propio órgano jurisdiccional.

“Los cuadernos auxiliares podrán consultarse físicamente por las partes en los órganos jurisdiccionales con las salvaguardas respectivas tratándose de la información reservada o confidencial.

“Asimismo, la digitalización de pruebas, poderes, valores y garantías diversas quedará al arbitrio de la juzgadora o juzgador, pudiéndose, en su caso, incluir una certificación en el expediente electrónico que dé cuenta de éstas e incluya una fotografía o imagen del objeto en cuestión.”

“De los artículos antes citados, se desprende, que Capizzi, en caso de que el juicio se radique en la Ciudad de México, podrá acceder a la jurisdicción desde el portal de servicios en línea, las 24 horas, asimismo podrá revisar actuaciones y presentar escritos, desde cualquier computadora, razón por la cual, la consideración del Magistrado Responsable, consistente que en [REDACTED] se vería en desventaja frente a [REDACTED] en el caso de que el juicio ejecutivo mercantil se radique en la Ciudad de México, máxime que en caso de que

se niegue el amparo y protección de la justicia de la unión, sí implicaría una dificultad adicional para HSBC para recuperar su crédito, en un escenario ya en si complicado.

“Omisión de tomar en consideración las características fácticas del caso que nos ocupa.

“Contrario a lo considerado por el Magistrado Responsable, en la especie, no se viola el principio de igualdad entre las partes, pues, tal como el Magistrado Responsable omitió tomar en consideración, [REDACTED] es a diferencia de los ahorradores accionantes en los juicios de los cuales derivó la jurisprudencia de rubro "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.", es una empresa grande con un avío de clientes en toda la República Mexicana, así con capacidad crediticia para obtener un préstamo de al menos \$15'000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), sin perjuicio de los diversos créditos que tiene con [REDACTED], así como diversas instituciones de crédito.

“En la especie, al consultar la página web de [REDACTED], se advierte lo siguiente:

“**HISTORIA**

“[REDACTED] cuenta con más de 30 años de experiencia en el mercado, siendo una empresa 100 % mexicana, dedicada al diseño, fabricación y comercialización de muebles de baño de cerámica vitrificada.

“Ofrecemos una amplia gama de productos para satisfacer todas las necesidades de nuestros clientes. Tenemos línea de Gran Lujo, Lujo, Ecológica, Económica e institucional, así como productos para necesidades especiales.

“Exportamos el 30% de la producción a Estados Unidos, Canadá, Puerto Rico, Guatemala, Chile, Panamá, Salvador, Costa Rica, Bolivia entre otros países.

Está entre las cinco (sic) empresas más importantes de su ramo en México y ocupamos el tercer lugar en ventas de las veinte más en el país del ramo.

“[REDACTED] : líder en el mercado de sanitarios ecológicos y sanitarios de alto desempeño.””

“Adicionalmente, de haber analizado el Contrato Base de la acción, el Magistrado Responsable, hubiera advertido que [REDACTED] tuvo una línea de crédito de al menos \$15'000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.), y que en dicho Contrato Base de la acción se encuentran diversos elementos objetivos que demuestran la solvencia de dicha empresa, pretender violar el principio de igualdad en perjuicio de [REDACTED] y en beneficio de [REDACTED], no se justifica en la especie, pues contrario a los ahorradores de los juicios de los

cuales derivó la contradicción de tesis que dio lugar a la multicitada jurisprudencia, [REDACTED] es una empresa importante y grande, que adeuda más de \$15'000,000.00 (Quince Millones de Pesos 00/100 M.N.) a [REDACTED], mientras que los referidos ahorradores fueron acreedores de las instituciones de crédito demandadas.

"En términos de lo anterior, se advierte que el Magistrado Responsable, aplicó sin mayor estudio o análisis la Jurisprudencia "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.", pues de haber estudiado el engrosé de la contradicción de tesis 192/2018 que dio lugar a dicha jurisprudencia, así como los elementos objetivos del caso que nos ocupa, hubiera determinado que no resultaba aplicable al caso en concreto la multicitada jurisprudencia (i) por el tipo de procedimiento que nos ocupa, (ii) por las características particulares de [REDACTED], y (iii) que en la especie el Banco es Acreedor, mientras que en las diversos asuntos, los Bancos eran deudores.



“En estos términos, se advierte que la prórroga de competencia pactado por las partes en el contrato base de la acción es válido y eficaz, en virtud de que, el contrato base de la acción, no se trata de un contrato de adhesión, las partes pactaron libremente sus términos, y el Magistrado Responsable, omitió completamente estudiar pormenorizadamente los documentos base de la acción, y basó su decisión en fundamentos improcedentes, razón por la cual, sus Señorías deberán conceder el amparo y protección de la justicia de la unión.

“Finalmente, sus Señorías advertirán que la Sentencia Reclamada por los vicios antes detallados deviene de inconstitucional al violar el principio de legalidad, así como los artículos 14, 16 y 17, así como los principios de congruencia y exhaustividad contemplados tanto en la constitución, como en el artículo 1070 del Código de Comercio. En consecuencia, es procedente y así lo pido, que sus Señorías concedan a el amparo y protección de la justicia de la unión.”

SEXTO. Antecedentes del juicio

El acto reclamado deriva de un juicio ejecutivo mercantil que promovió [REDACTED] d

a,

H

[REDACTED] y [REDACTED]

La institución bancaria demandó el pago de la cantidad de \$15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 moneda nacional) por concepto de suerte principal, intereses ordinarios, moratorios y el pago de gastos y costas.

Asimismo en los hechos de la demanda, la parte actora manifestó que las prestaciones demandadas derivan de la suscripción del **contrato de apertura de crédito en cuenta corriente** suscrito el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho.

De la demanda correspondió conocer al Juzgado Décimo de Distrito en Materia Civil en la ciudad de México, quedando registrada con el número

En proveído de treinta y uno de julio de dos mil veinte, el Juez del conocimiento declaró, carecer de



competencia legal por razón de territorio al actualizarse el supuesto de la jurisprudencia cuya voz es: "COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA".

Inconforme con esa determinación la institución bancaria interpuso recurso de apelación de la que correspondió conocer al Cuarto Tribunal Unitario en Materias Civil, Administrativa y Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones del Primer Circuito, quedando registrado con el número de toca [REDACTED] 0.

Con fecha treinta de noviembre de dos mil veinte, el Tribunal de segunda instancia confirmó el auto apelado.

Constituyendo esta resolución la materia del amparo directo.

Estudio

Indebida fundamentación y motivación y violación a los principios de congruencia y exhaustividad

La institución bancaria quejosa aduce que la sentencia reclamada esta indebidamente fundada y motivada así como que carece de congruencia y exhaustividad porque considera al contrato base de la acción como un contrato de adhesión.

Manifiesta la promovente del amparo que el Tribunal Unitario no tomó en cuenta lo previsto por el artículo 3º de las Disposiciones de carácter general en materia de Transparencia aplicables a las Instituciones de Crédito, entre otras, emitidas por la Comisión Nacional para la Defensa al Usuario de Servicios Financieros que establece como tope la cantidad de



900,000 UDIS unidades de inversión) o \$5'835,142.80 (cinco millones ochocientos treinta y cinco mil ciento cuarenta y dos pesos 80/100 moneda nacional).

Que si en el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente, base de la acción se otorgó un crédito por la cantidad de \$15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 moneda nacional) por ende, no se trata de un contrato de adhesión y no le es aplicable la jurisprudencia que se citó en la sentencia reclamada.

Agrega además, de que los contratos de adhesión tienen que ser revisados y posteriormente registrado en el RECA de la Comisión Nacional para la Defensa al Usuario de Servicios Financieros en términos de los artículos 56 bis, 57, 59 bis y 59 bis1 de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Que por ello, el documento base de la acción es un crédito empresarial, del que no se advierte número

o folio otorgado por [REDACTED] A de la Comisión Nacional para la Defensa al Usuario de Servicios Financieros.

Que en la jurisprudencia que citó la autoridad responsable cuya voz es: “COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDOS SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA”, se analizaron supuestos derivados de juicios orales mercantiles y no así ejecutivo mercantil como en el caso, juicios que requieren ciertas formalidades en cada uno de ellos, como es, en los juicios orales, evitar que los justiciables tuvieran que contratar una defensa que necesariamente tuviera que asistir a audiencias orales en un fuero distinto al que residen.

Que a diferencia de los casos abordados en la jurisprudencia antes citada, la demandada tiene capacidad económica para obtener un crédito de al

menos \$15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 moneda nacional) y además, es una empresa grande e importante; que de haber considerado esas características, el juzgador hubiera determinado inaplicable el criterio en mención.

Que si bien, la actora cuenta con diversas sucursales, también lo es, que se debe atender a la voluntad de las partes que se sometieron al clausulado del contrato, entre ellas, la de sometimiento expreso a la jurisdicción de los Tribunales de la ciudad de México.

Son infundados los planteamientos de la promovente del amparo.

Ello es así, pues en la opinión de la mayoría de los integrantes de este Tribunal, la jurisprudencia 1a./J. 1/2019 (10a.), que integró la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 192/2018,²⁵ **sí resulta aplicable al caso concreto.**

²⁵ Registro digital: 2019661, Instancia: Primera Sala, Décima Época, Materias(s): Constitucional, Civil, Tesis: 1a./J. 1/2019 (10a.), Fuente: Gaceta

La citada jurisprudencia se reproduce a continuación:

“COMPETENCIA 1 POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA.- De conformidad con lo dispuesto por los artículos 1093 y 1120 del Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable, en atención a que las partes de un acto jurídico pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar a través del pacto de sumisión, mediante el cual los interesados manifiestan su voluntad en forma expresa. Sin embargo, para que se configure esa sumisión, necesariamente debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa. Ahora, si bien es cierto que en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos –entre los que se



encuentran los contratos de adhesión de prestación de servicios bancarios—; también lo es que esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual. Efectivamente, constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por tales actividades. Por lo anterior, resulta lógico y razonable estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, máxime si estamos en presencia de un contrato mercantil de adhesión cuyos términos no resultan negociables. Consecuentemente, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, lo cierto es que tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio, siempre y cuando también se proteja el interés de la

institución crediticia demandada, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se desenvuelva la controversia”.

La jurisprudencia previamente transcrita, establece una **excepción a la regla de sumisión expresa**, que prevé el artículo 1093 del Código de Comercio, respecto de contratos de adhesión que celebran las instituciones de crédito.

En efecto, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia antes reproducida, el tribunal constitucional en lo conducente puntualizó lo siguiente:

a) Que conforme a los artículos 1090, 1092, 1093, 1094 y 1104 del Código de Comercio, la competencia territorial es prorrogable, toda vez que los contratantes pueden someterse, para el caso de controversia a los tribunales de un determinado lugar, a través del pacto de sumisión expresa, en el que los interesados manifiestan su voluntad en forma expresa,



para que los tribunales de un determinado lugar sean competentes para conocer de un litigio futuro o presente.

b) Que no obstante, para que se configure esa sumisión expresa, debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa, atento a la reforma al artículo 1093 del Código de Comercio, publicada en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de enero de mil novecientos ochenta y nueve.

c) Que la citada reforma legal tuvo origen en la preocupación por salvaguardar los derechos constitucionales de igualdad ante la ley, debido proceso y equidad procesal, habida cuenta que si bien respetó el derecho de las partes de acordar el tribunal al que se someterán en caso de que exista controversia; dicha prerrogativa la limitó a los supuestos que prevé el

numeral modificado, con base en el hecho de que no resultara perjudicial para una de las partes, tener que litigar en un lugar distinto al en que vive, a donde se celebró el contrato o al lugar donde se encuentra la cosa, de manera que pudiera redundar en el impedimento o denegación de acceso a la justicia, según lo reconocen las principales convenciones internacionales.

d) Que **los pronunciamientos** que la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha hecho **en relación con los contratos de adhesión**, y si bien están relacionados con contratos de consumo, **resultan aplicables también a las convenciones financieras o bancarias**, *pues no está en juego el análisis de la materia en que se emiten*, sino únicamente **se atiende a la ponderación de su naturaleza y elementos constitutivos**.

e) Que el uso de los contratos de adhesión constituye un recurso útil, pues reduce de manera significativa los costos de transacción; sin embargo, no puede ignorarse que la masificación de las relaciones



jurídicas mediante contratos de adhesión implica la sumisión contractual de los consumidores frente a los términos unilaterales de la empresa.

f) Que el consumidor no tiene la facultad de negociar los términos del acuerdo, aun cuando hubiese leído y entendido los términos del contrato por adhesión y deseara negociar la modificación de algunas de sus cláusulas, carece de la posibilidad para efectuar dichos cambios. Esta asimetría constituye una característica común en los contratos de adhesión celebrados con grandes empresas.

g) Que si bien es cierto que el consumidor es libre para otorgar su consentimiento en los contratos de adhesión, también lo es que en dichas relaciones pueden ubicarse en una posición de vulnerabilidad frente al proveedor ya que:

l) El consumidor no negocia y, por ende, no puede incidir de forma alguna en la elaboración del contrato, y

II) Se presenta una asimetría en la información entre el proveedor y el consumidor, con relación al servicio, y a la formulación e implicaciones del contrato que firma, al no intervenir en la elaboración de las cláusulas.

h) Que entonces las cláusulas de los contratos de adhesión deben interpretarse a la luz de los derechos del usuario, buscando equilibrar la situación de desventaja a que pueda enfrentarse el consumidor.

i) Que por ende la limitación aludida del pacto de sumisión expresa tratándose de los contratos bancarios de adhesión cuando el usuario del servicio financiero, por las cláusulas estipuladas en el formato del contrato de adhesión se someta a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual, dado que esa circunstancia conlleva la necesidad de trasladarse a una ciudad distinta para efectuar la defensa de sus pretensiones, lo que sin duda generará un detrimento económico que pudiera traducirse en impedimento o denegación de acceso a la justicia para el acreditado,



máxime si se toma en consideración que la institución financiera tuvo presencia en el lugar donde se promovieron las controversias o de donde se contrajeron las obligaciones.

j) Que constituye un hecho notorio que tratándose de los contratos de adhesión las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de la jurisdicción territorial de la Ciudad de México, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, de ahí que sea razonable estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia; y si bien es cierto que los particulares tienen la opción de no celebrarlo si no quieren obligarse por los términos estipulados, también es verdad que de negarse a celebrarlo no podrían disfrutar de los beneficios de los servicios bancarios.

k) Que por tanto con independencia de que los contratantes hayan estipulado conforme al artículo 1093

del Código de Comercio una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, lo cierto es que tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, siempre y cuando también se proteja el interés de la institución crediticia, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se desenvuelva la controversia.

Con base en lo anterior, la mayoría de los integrantes de este Tribunal estiman que **se trata de una jurisprudencia temática** en lo concerniente a la naturaleza de los contratos de adhesión, ya que la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que los pronunciamientos que ha hecho en relación con los contratos de adhesión, si bien están relacionadas con contratos de consumo, **resultan**



aplicables también a las convenciones financieras o bancarias, por lo que las cláusulas de los contratos de adhesión deben interpretarse a la luz de los derechos del usuario, dado que *las cláusulas en ese tipo de acuerdo de voluntades implica la sumisión contractual de los consumidores frente a los términos unilaterales de la empresa.*

Precisado lo anterior debe señalarse, que conforme al criterio de la mayoría debe desestimarse lo alegado por la quejosa porque el documento base de la acción, es un contrato de adhesión porque la parte deudora no tenía opción de negociar el contrato, independientemente de su cuantía, por lo cual sí tiene las características de un contrato de adhesión.

Lo anterior se afirma, pues los artículos 85 de la Ley Federal de Protección al Consumidor y 56, segundo párrafo de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros²⁶, definen a un contrato

²⁶ "ARTICULO 85.- Para los efectos de esta ley, se entiende por contrato de adhesión el documento elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o la prestación de un servicio, aun cuando dicho

como de adhesión, es el hecho de que sea elaborado unilateralmente por el proveedor, para establecer en formatos uniformes, los términos y condiciones aplicables a la adquisición de un producto o a la prestación de un servicio.

Por su parte, el artículo 11, fracción XVIII, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros²⁷, establece que la Comisión Nacional estará facultada para celebrar contratos o convenios con las

documento no contenga todas las cláusulas ordinarias de un contrato. Todo contrato de adhesión celebrado en territorio nacional, para su validez, deberá estar escrito en idioma español y sus caracteres tendrán que ser legibles a simple vista y en un tamaño y tipo de letra uniforme. Además, no podrá implicar prestaciones desproporcionadas a cargo de los consumidores, obligaciones inequitativas o abusivas, o cualquier otra cláusula o texto que viole las disposiciones de esta ley.”

“ARTÍCULO 56.- Como una medida de protección al Usuario, la Comisión Nacional revisará y, en su caso, propondrá a las Instituciones Financieras, modificaciones a los modelos de contratos de adhesión utilizados en sus diversas operaciones, en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 11 de esta Ley.

“Se entenderá por contrato de adhesión, para efectos de esta Ley, aquél elaborado unilateralmente por una Institución Financiera, cuyas estipulaciones sobre los términos y condiciones aplicables a la contratación de operaciones o servicios sean uniformes para los Usuarios.”

²⁷ “Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para:

(...)

“XI. Concertar y celebrar convenios con las Instituciones Financieras, así como con las autoridades federales y locales con objeto de dar cumplimiento a esta Ley. Los convenios con las autoridades federales podrán incluir, entre otros aspectos, el intercambio de información sobre los contratos de adhesión, publicidad, modelos de estados de cuenta, Unidades Especializadas de atención a usuarios, productos y servicios financieros”.



Instituciones financieras en la que podrán intercambiar información sobre contratos de adhesión, entre otros.

En ese contexto, el **contrato de apertura de crédito en cuenta corriente base de la acción, sí es un contrato de adhesión**, pues, quien impone los términos y condiciones es la institución de crédito hoy quejosa, sin que el deudor pueda oponerse a dichas condiciones, porque ante la oposición de éste, no se celebraría tal contrato, de ahí que al ser un contrato bancario de adhesión, es aplicable por analogía la jurisprudencia de rubro: **"COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA"**.

No obsta a lo anterior el hecho de que el juicio natural se promoviera en la vía ejecutiva mercantil y, por

su parte la jurisprudencia previamente transcrita interprete el contenido de los artículos 1092 y 1093 del Código de Comercio aplicados en juicios orales mercantiles, pues al ser temática, resulta aplicable por analogía a todo tipo de contratos de adhesión con independencia de la vía intentada.

Además la legislación mercantil prevé expresamente que los litigantes se pueden someter expresa o tácitamente a los órganos jurisdiccionales que ellos determinen, esto es, que la competencia por razón de territorio es prorrogable y las partes pueden renunciar al fuero que la ley les concede.

Por tanto, si la sumisión expresa se regula en similares términos tanto en juicios orales como ejecutivos mercantiles, la jurisprudencia en mención, sí resulta aplicable al caso concreto.

Luego, si las partes pactaron en la cláusula trigésima tercera²⁸ del contrato base de la acción, que

²⁸ **“Trigésima tercera.** Ley aplicable. Tribunales competentes. Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, serán aplicables las



para todo lo relativo a la interpretación y cumplimiento de ese contrato se someterían a las leyes y jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México y renunciaron al fuero de su domicilio presente o futuro, debe concluirse que conforme a lo establecido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, no es aplicable al caso la regla establecida en el artículo 78 del Código de Comercio (que dispone que la voluntad de las partes es ley suprema de los contratos), ya que esa regla genérica no aplica en tratándose de contratos de adhesión cuando se someta al usuario de un servicio, a la jurisdicción de un lugar distinto al de su residencia habitual.

Por tanto, es inconcuso que no existe una transgresión al derecho fundamental de acceso a la justicia de la sociedad quejosa, si su contenido y alcances están regidos precisamente por un mandato constitucional.

leyes de México y se someten irrevocablemente a la jurisdicción de los tribunales competentes de la ciudad de México, para conocer d cualquier controversia que se suscitase con motivo de la interpretación o ejecución de este contrato, a cuyo efecto las partes renuncian al fuero de cualquier otro domicilio, presente o futuro o que por cualquier otra razón pudiera corresponderles."

Lo anterior se corrobora sobre la base de la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia, consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio.

Además, la parte demandada se encuentra en un plano de desigualdad frente a la parte quejosa, de modo que el hecho de que tenga que litigar en otra entidad federativa, no es comparable con las cargas que tendría que aceptar el consumidor al desplazarse a otra ciudad, distinta a su domicilio, para la defensa de sus intereses.

Consecuentemente, aunque el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente no es uno de adhesión, ambos actos comparten la misma naturaleza, es decir, son de naturaleza mercantil, y en ambos intervienen una institución de crédito que pretende aplicar sin excepción la cláusula de sumisión expresa;



por lo que aunque el contrato de apertura de crédito de que se trata no esté previsto expresamente en la citada jurisprudencia, no debe perderse de vista que para dilucidar la cuestión, el juzgador debe atender a los métodos de aplicación, entre ellos el de la analogía, que opera cuando hay una relación entre un caso previsto expresamente en una norma jurídica o jurisprudencia y otro que no se encuentra comprendido en ella, pero que por la similitud con aquél, permite igual tratamiento jurídico en beneficio de la administración de la justicia.

Juicio se promovió en línea

En otro aspecto, la institución bancaria quejosa expresa que no se tomó en cuenta que la demanda de la que deriva el acto reclamado se presentó en línea y las partes pueden desahogar prácticamente todas las actuaciones en el portal de servicios en línea del Poder Judicial Federal.

Que tampoco se consideró que desde el doce de junio de dos mil veinte, las partes pueden acceder a

la jurisdicción desde cualquier computadora a través del portal de servicios en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en el cual se pueden consultar todas y cada una de las actuaciones que obran en el expediente físico, así como presentar promociones, interponer medios ordinarios de defensa y la tramitación del juicio, el cual los abogados de la demandada podrán actuar y revisar actuaciones desde el citado portal de servicios en línea.

Que en cambio la actora tendría que erogar gastos para la realización de la diligencia de requerimiento, embargo y emplazamiento en el Estado de Guanajuato.

Es inoperante el motivo de queja planteado.

Se afirma lo anterior, dado que no es jurídicamente posible abordar el estudio de aspectos que no fueron hechos valer ante el tribunal de segunda instancia, como lo es, que el juicio se tramita en línea y por tanto, las partes pueden desahogar prácticamente



todas las actuaciones en el portal de servicios en línea del Poder Judicial Federal.

En efecto, la institución bancaria apelante, en sus agravios se circunscribió a manifestar:

1. Que la jurisprudencia en que se apoyó el juez del conocimiento para desechar la demanda, resulta inaplicable, porque atendiendo a la voluntad de las partes y al domicilio de la actora, los Tribunales de la ciudad de México son competentes para conocer de la demanda; además no se trata de un contrato de adhesión dado que el crédito que se otorgó supera las 900,000.00 unidades de inversión en términos de lo previsto por el artículo 3º de las disposiciones de carácter general en materia de transparencia aplicables a Instituciones de Crédito, entre otras.

2. Que el contrato base de la acción no constituye una operación masiva porque el clausulado es acordado y sancionado por las partes contratantes tan es así, que en el contrato constan las firmas autógrafas

tanto del acreditado como del obligado solidario, aunado a que los criterios contendientes en la jurisprudencia invocada por el a quo tuvieron su origen en juicios orales mercantiles promovidos por usuarios en contra de Instituciones bancarias.

Luego, si los argumentos que se aducen en el concepto de violación en estudio, no se hicieron valer ante el Tribunal Unitario que emitió la sentencia que constituye el acto reclamado, por ende, no pueden ser tomados en consideración, dado que sería como aceptar que a través del juicio de amparo se pudiera variar la resolución reclamada al introducir aspectos novedosos respecto de los que no se ocupó la autoridad responsable al emitir el acto que combate en el amparo directo.

Se cita en apoyo a lo anterior por analogía la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación²⁹ que se reproduce:

²⁹ Registro digital: 176604, Instancia: Primera Sala, Novena Época, Materias(s): Común, Tesis: 1a./J. 150/2005, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXII, Diciembre de 2005, página 52, Tipo: Jurisprudencia.



“AGRAVIOS INOPERANTES. LO SON AQUELLOS QUE SE REFIEREN A CUESTIONES NO INVOCADAS EN LA DEMANDA Y QUE, POR ENDE, CONSTITUYEN ASPECTOS NOVEDOSOS EN LA REVISIÓN. En términos del artículo 88 de la Ley de Amparo, la parte a quien perjudica una sentencia tiene la carga procesal de demostrar su ilegalidad a través de los agravios correspondientes. En ese contexto, y atento al principio de estricto derecho previsto en el artículo 91, fracción I, de la ley mencionada, resultan inoperantes los agravios referidos a cuestiones no invocadas en la demanda de garantías, **toda vez que al basarse en razones distintas a las originalmente señaladas, constituyen aspectos novedosos que no tienden a combatir los fundamentos y motivos establecidos en la sentencia recurrida, sino que introducen nuevas cuestiones que no fueron abordadas en el fallo combatido,** de ahí que no exista propiamente agravio alguno que dé lugar a modificar o revocar la resolución recurrida.”

Derivado de lo anterior, resulta infundado que la resolución reclamada, no esté debidamente fundada ni motivada y que se haya infringido el principio de congruencia y exhaustividad, toda vez que como ya se vio, el acto reclamado se emitió conforme a la jurisprudencia de la Primera Sala de la Suprema Corte

de Justicia de la Nación ya citada, la cual resulta aplicable al caso por analogía y con la cual se da respuesta a los planteamientos de la quejosa.

Por las razones antes expuestas, el acto reclamado se emitió conforme a los criterios que invocó la promovente del amparo cuyos rubros son: “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN”³⁰, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. LA DIFERENCIA ENTRE LA FALTA Y LA INDEBIDA SATISFACCIÓN DE AMBOS REQUISITOS CONSTITUCIONALES TRASCIENDE AL ORDEN EN QUE DEBEN ESTUDIARSE LOS CONCEPTOS DE VIOLACIÓN Y A LOS EFECTOS DEL FALLO PROTECTOR”³¹, “FUNDAMENTACIÓN Y MOTIVACIÓN. SU DISTINCIÓN ENTRE SU FALTA Y CUANDO ES INEBIDA”³², “SENTENCIAS EN MATERIA MERCANTIL. LA OMISIÓN DEL JUZGADOR DE ESTUDIAR LAS EXCEPCIONES OPUESTAS NO CONTENIDAS EN EL APARTADO ESPECIFICO, VIOLA

³⁰ Registro 203143, jurisprudencia VI.2º. J/43, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, Marzo de 1996, Materia Común, página 769.

³¹ Registro 170307, jurisprudencia I.3º.C. J/47, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXVII, febrero de 2008, Materia Común, página 1964.

³² Registro 173565, jurisprudencia I. 6º. C. J/52, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Materia Común, página 2127.



EL PRINCIPIO DE CONGRUENCIA EXTERNA”³³ y “CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN SENTENCIAS DICTADA EN AMPARO CONTRA LEYES. ALCANCE DE ÉSTOS PRINCIPIOS”³⁴.

En las relatadas condiciones, al haberse desestimado los motivos de disenso y, al no advertir violación manifiesta de la ley que haga necesario suplir la deficiencia de la queja en los términos que prevé el artículo 79 de la Ley de Amparo, se **niega** la Protección de la Justicia Federal solicitada.

La negativa del amparo se hace extensiva a los actos de ejecución que se atribuyen a la autoridad ejecutora, por no reclamarse por vicios propios.

Es aplicable al caso, la jurisprudencia 91, sustentada por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación³⁵, que establece:

³³ Registro 2009157, tesis VI.1º.C. 69 C (10ª.), Décima Época, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 18, mayo de 2015, Tomo III, página 2355.

³⁴ Registro 17878, Jurisprudencia 1ª/J.33/2005 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXI, abril de 2005, materia Común, página 108..

³⁵ Registro 917625, Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, página 72.

“AUTORIDADES EJECUTORAS. NEGACION DE AMPARO CONTRA ORDENADORAS.- Si el amparo se niega contra las autoridades que ordenen la ejecución del acto que se estima violatorio de garantías, debe también negarse respecto de las autoridades que sólo ejecutaron tal acto por razón de su jerarquía”.

Cabe hacer notar que el presente asunto fue resuelto en sesión celebrada a distancia mediante la utilización de los medios electrónicos y tecnológicos proporcionados por el Consejo de la Judicatura Federal con fundamento en los Acuerdos 8/2020, 10/2020, 13/2020, 15/2020, 21/2020, 25/2020 y 37/2020 emitidos por dicho Consejo, así como las circulares SECNO/29/2020, SECNO/30/2020, SECNO/1/2021, SECNO/4/2021, SECNO/06/2021, SECNO/08/2021, SECNO/09/2021 y SECNO/10/2021, de la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Propio Consejo de la Judicatura Federal.

Por lo expuesto y con apoyo además en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso a), de la Constitución Federal; 1º, fracción I, 34, 74, 170 y 188



de la Ley de Amparo y 37, fracción I, inciso c), y 38 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, se resuelve:

ÚNICO. La Justicia de la Unión **no ampara ni protege** a **!**

_____ , contra los actos y autoridades que quedaron precisados al inicio de la presente ejecutoria.

Notifíquese; con testimonio de esta resolución, devuélvanse los autos a la autoridad señalada como responsable y en su oportunidad archívese este amparo.

Así, por **mayoría** de votos de los señores Magistrados **Jaime Aurelio Serret Álvarez** y **Alejandro Villagómez Gordillo**, contra el voto particular de la Magistrada **Luz Delfina Abitia Gutiérrez**, que se agrega por separado, lo resolvió el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, cuyas firmas

aparecen a continuación, al igual que la del Secretario de Acuerdos que autoriza y da fe, hasta hoy **tres de junio de dos mil veintiuno**, en que se realizó el engrose de esta resolución. Doy fe.

MAGISTRADO PRESIDENTE

FIRMADO
LIC. JAIME AURELIO SERRET ÁLVAREZ

MAGISTRADO PONENTE:

FIRMADO
ALEJANDRO VILLAGÓMEZ GORDILLO

MAGISTRADA:

FIRMADO
LIC. LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ

EL SECRETARIO DE ACUERDOS.

FIRMADO
LIC. JORGE ALEJANDRO RAMÍREZ RUIZ.

Esta foja número **ciento catorce**, corresponde a la parte final de la ejecutoria dictada en el amparo directo civil número **D.C. 89/2021.-** Ciudad de México, a **tres de junio de dos mil veintiuno.-** Conste.-

Responsables de la supresión de datos

Secretario proyectista: LIC. MARITZA AZUZENA OSUNA MARTÍNEZ.

Oficial Administrativo: Claudia Mejía Mejía

AVG/MAOM/mmc



**VOTO PARTICULAR QUE FORMULA LA
MAGISTRADA LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ, en
el juicio de amparo directo D.C. 89/2021, promovido por**

La que suscribe estima, que contrario a lo sostenido por la mayoría de los integrantes de este Tribunal, el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México es competente para conocer de la controversia natural, por razón de territorio, en atención a las siguientes consideraciones.

Ello es así, pues el artículo 14 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, establece lo siguiente:

*"ARTÍCULO. 14.- A ninguna ley se dará efecto retroactivo en perjuicio de persona alguna.
"Nadie podrá ser privado de la libertad o de sus propiedades, posesiones o derechos, sino mediante juicio seguido ante los tribunales previamente establecidos, en el que se cumplan las formalidades esenciales del procedimiento y conforme a las Leyes expedidas con anterioridad*

“En los juicios del orden criminal queda prohibido imponer, por simple analogía, y aún por mayoría de razón, pena alguna que no esté decretada por una ley exactamente aplicable al delito de que se trata.

Del artículo previamente transcrito se desprende, que interesa, que en los juicios del orden civil, las sentencias definitivas deberán dictarse conforme a la ley o a la interpretación jurídica de la misma, y que ésta se fundarán en los principios generales del derecho, es decir, el juicio debe regirse por la ley que es aplicable al caso concreto.

el pago del capital e intereses ordinarios y moratorios derivado del contrato de apertura

interesados manifiestan su voluntad en forma expresa. Sin embargo, para que se configure esa sumisión, necesariamente debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa. Ahora, si bien es cierto que en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos –entre los que se encuentran los contratos de adhesión de prestación de servicios bancarios–; también lo es que esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual. Efectivamente, constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por tales actividades. Por lo anterior, resulta lógico y razonable estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en

En efecto, en la ejecutoria de la que derivó la jurisprudencia antes reproducida, el tribunal constitucional en lo conducente puntualizó lo siguiente:

b) Que constituye un hecho notorio, según dice la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de la jurisdicción territorial de la Ciudad de México, sino que lo hacen a lo largo de todo el territorio nacional, por lo que no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse a otras entidades para poder tener un acceso efectivo a la justicia.

c) Que si bien los particulares tienen la opción de no celebrar el contrato, lo cierto es que si ello ocurriera no podrían disfrutar de los beneficios de los servicios bancarios.

d) Que con independencia de que los

En la especie, no se actualizan las mencionadas características, pues como se reconoce en la propia sentencia de mayoría el contrato base de la acción no es un contrato de adhesión.

FRANCISCA CORTES SALAZAR
70.6a.65.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.01.34.44
2021-10-05 16:55:01

“Los contratos de adhesión sujetos a registro deberán contener una cláusula en la que se determine que la Procuraduría será competente en la vía administrativa para resolver cualquier controversia que se suscite sobre la interpretación o cumplimiento de los mismos. Asimismo, deberán señalar el número de registro otorgado por la Procuraduría”.

"Artículo 87.- En caso de que los contratos de adhesión requieran de registro previo ante la Procuraduría, los proveedores deberán presentarlos ante la misma antes de su utilización y ésta se limitará a verificar que los modelos se ajusten a lo que disponga la norma correspondiente y a las disposiciones de esta ley, y emitirá su resolución dentro de los treinta



días hábiles siguientes a la fecha de presentación de la solicitud de registro. Transcurrido dicho plazo sin haberse emitido la resolución correspondiente, los modelos se entenderán aprobados y será obligación de la Procuraduría registrarlos, quedando en su caso como prueba de inscripción la solicitud de registro. Para la modificación de las obligaciones o condiciones de los contratos que requieran de registro previo será indispensable solicitar la modificación del registro ante la Procuraduría, la cual se tramitará en los términos antes señalados.

“Los contratos que deban registrarse conforme a esta ley, las normas oficiales mexicanas y demás disposiciones aplicables, y no se registren, así como aquéllos cuyo registro sea negado por la Procuraduría, no producirán efectos contra el consumidor.

“Los contratos de adhesión registrados ante la Procuraduría deberán utilizarse en todas sus operaciones comerciales y corresponder fielmente con los modelos de contrato registrados por la autoridad.

“El incumplimiento a este precepto se sancionará conforme lo dispuesto en el artículo 128, con excepción del párrafo anterior que se sancionará en términos del artículo 128 ter”.

Ley de Protección y Defensa al Usuario de
Servicios Financieros.

*“Artículo 56.- Como una medida de protección al Usuario, la **Comisión Nacional** revisará y, en su caso, propondrá a las **Instituciones Financieras**, modificaciones a los modelos de contratos de adhesión utilizados en sus diversas operaciones, en términos de lo dispuesto en la fracción XVIII, del artículo 11 de esta Ley.*

“Se entenderá por contrato de adhesión, para efectos de esta Ley, aquél elaborado unilateralmente por una Institución Financiera, cuyas estipulaciones sobre los términos y condiciones aplicables a la contratación de operaciones o servicios sean uniformes para los Usuarios.”

Por su parte, el artículo 11, fracción XVIII, de la Ley de Protección y Defensa al Usuario de Servicios Financieros, a que hace referencia el precepto previamente transcrito, establece lo siguiente:

“Artículo 11. La Comisión Nacional está facultada para:

(...)

“XVIII. Concertar y celebrar convenios con

competencia territorial es prorrogable, en atención a que las partes de un acto jurídico pueden someterse, para el caso de controversia, a los tribunales de un determinado lugar a través del pacto de sumisión, mediante el cual los interesados manifiestan su voluntad en forma expresa. Sin embargo, para que se configure esa sumisión, necesariamente debe existir la voluntad de las partes en renunciar al fuero que la ley les concede y que se haga la designación de tribunales competentes, pero con la condición de que sean únicamente los del domicilio de alguna de las partes, los del lugar del cumplimiento de alguna de las obligaciones contraídas, o los del lugar de ubicación de la cosa. Ahora, si bien es cierto que en términos de lo dispuesto por el artículo 78 del Código de Comercio, la voluntad de las partes es la ley suprema de los contratos —entre los que se encuentran los contratos de adhesión de prestación de servicios bancarios—; también lo es que esa regla genérica en materia mercantil no es aplicable al pacto de sumisión cuando se someta al usuario financiero a la jurisdicción de un lugar diferente al de su residencia habitual. Efectivamente, constituye un hecho notorio que las instituciones bancarias no ofrecen sus servicios únicamente dentro de una jurisdicción territorial específica, sino que lo hacen a lo largo



de todo el territorio nacional, obteniendo lucro por tales actividades. Por lo anterior, resulta lógico y razonable estimar que, en caso de controversia, no debe obligarse a los usuarios financieros a tener que desplazarse e incurrir en costos extraordinarios para poder tener un acceso efectivo a la justicia, máxime si estamos en presencia de un contrato mercantil de adhesión cuyos términos no resultan negociables. Consecuentemente, con independencia de que los contratantes hayan estipulado una cláusula de sumisión expresa a la competencia de los juzgados y tribunales de determinada circunscripción territorial, lo cierto es que tratándose de contratos de adhesión celebrados con instituciones bancarias, esa regla no cobra aplicación, debiendo apegarse a la interpretación que más favorezca el derecho de acceso a la justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Federal, que consiste en que los particulares cuentan con libertad para fijar la competencia donde se tramitará el juicio, tomando como parámetro el lugar donde se encuentre su domicilio, siempre y cuando también se proteja el interés de la institución crediticia demandada, que se traduce en que no se vea mermado su derecho de defensa por no contar con infraestructura o representación en los lugares en donde se desenvuelva la

[illegible]

FRANCISCA GORTES SALAZAR
70.69.86;20.63.5a;68.00.00.00.00 € 0.00.00.00.00.00.00.00.00.00
2024-10-05 16:55:01

Al respecto cabe hacer notar que el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente base de la acción, fue celebrado el veintitrés de octubre de dos mil dieciocho entre :

~~Resolución~~ Sinceded Arsópino de Omititobá (en su



(en su carácter de obligado solidario).

En dicho contrato, las partes convinieron libremente el monto del crédito, lugar y forma de pago, los intereses ordinarios y moratorios, etcétera.

De esta forma, no se aprecia que se trate de un contrato preredactado para ser usado masivamente con una generalidad de sujetos, sin posibilidad de discutirlo en forma particularizada, de ahí que no se esté en presencia de un contrato de adhesión.

En esas condiciones, contrario a lo resuelto por el Tribunal responsable, la jurisprudencia de rubro: *"COMPETENCIA POR SUMISIÓN EXPRESA. LA REGLA ESTABLECIDA EN EL ARTÍCULO 1093 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, NO RESULTA APLICABLE A LAS CLÁUSULAS ESTIPULADAS EN CONTRATOS BANCARIOS DE ADHESIÓN CUANDO SE ADVIERTA VULNERACIÓN A LA GARANTÍA DE ACCESO A LA IMPARTICIÓN DE JUSTICIA"*, no resulta aplicable al caso concreto, en virtud de que dicho criterio únicamente

Ahora bien, en relación con la competencia, los artículos 143, 144, 145, 149, primer párrafo, y 151 del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, señalan lo siguiente:

“Artículo 144. La competencia de los tribunales se determinará por la materia, la cuantía, el grado y el territorio”.

“Artículo 145. Ningún tribunal puede negarse a conocer de un asunto sino por considerarse incompetente. En este caso debe expresar en su resolución los fundamentos legales en que se apoye”.

“Artículo 149. La competencia por razón de territorio y materia son las únicas que se pueden prorrogar, salvo que correspondan al

De la anterior transcripción se desprende claramente, que las partes se sometieron claramente a la jurisdicción de los tribunales de la Ciudad de México, de ahí que si la actora, hoy quejosa presentó la demanda en esta entidad federativa, es evidente que se sometió a la jurisdicción de esta ciudad y por ello debe acatarse tal voluntad.

Es así, pues se insiste, la cláusula de sumisión expresa a la competencia de los Tribunales de la Ciudad de México, sí es aplicable tratándose de contratos de apertura de crédito en cuenta corriente, de ahí que ante dicha sumisión expresa el Juez Décimo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México sea competente para conocer del juicio natural.

Por otro lado, la suscrita reitera, que en la propia ejecutoria dictada por la mayoría, se manifestó lo siguiente: ***“el contrato de apertura de crédito en cuenta corriente no es uno de adhesión, ambos actos***

Máxime que en el caso concreto se aprecia que no se vulnera la garantía de acceso a la justicia de la sociedad demandada [REDACTED] de [REDACTED] que sí podía acudir sin problema al procedimiento que se ejerciera en la Ciudad de México, porque se trata de una empresa internacional, quien obtuvo un préstamo por la cantidad de \$15'000,000.00 (quince millones de pesos 00/100 M.N.) por parte del banco actor con fines de hacer negocios y obtener un lucro.

Por las razones expresadas, es que la suscrita no comparte el proyecto de mayoría y por ello estima que debe desecharse.

**RESPECTUOSAMENTE
LA MAGISTRADA.**

FIRMADO

LIC. LUZ DELFINA ABITIA GUTIÉRREZ.

Responsables de la supresión de datos: Sria. Lic. Francisca Cortés Salazar Oficial Admvo. Ma. Dolores Gómez Banda.

Esta foja número ciento treinta y seis corresponde a la parte final del voto particular dictado en el DC-89/2021.- Ciudad de México, a tres de junio de dos mil veintiuno.-
Conste

Firmante	Nombre:	FRANCISCA CORTES SALAZAR	Validez:	OK	Vigente
Firma	# Serie:	706a6620636a66000000000000000000000000000013444	Revocación	OK	No Revocado
	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	13/07/2021T01:08:53Z / 12/07/2021T20:08:53-05:00	Status:	OK	Valida
	Algoritmo:	Sha256withRSA			
	Cadena de Firma:	2f 6b 10 93 1d b9 56 c6 98 8a c3 75 a5 c6 0d 5b bb 17 39 29 de 5f 47 ed 29 fa 81 80 31 a4 be c7 ae 15 fa 1a bb 62 c7 73 ad bc 49 bc 99 8e 31 19 1b 26 1b 15 92 54 82 79 bf ad b2 e7 9e 29 2d eb 3e fe d0 69 fe 22 f5 09 ab ec 8c 12 59 5c 3e c9 15 47 cd 5e 37 df 01 3e 05 4d dc 80 5d 7e 0d ae 56 79 02 61 64 3b 86 11 97 61 4f 9d a6 18 18 aa e4 06 e4 ea bf 1d a6 64 a2 d1 d2 26 13 6f 00 f1 cd 11 ba 2b 0c 55 33 a7 00 0c 99 3b d2 10 96 e9 12 4e 2b 55 df dd a2 91 41 9d b7 85 79 53 98 a1 f7 f2 a8 51 05 b1 85 42 ac 1d a5 1e fb 59 51 6a 3a 1d 86 7f fc 13 72 3e 64 4d 1e 88 a6 c2 e1 56 53 fe 14 43 90 5d 20 3f ef c7 bf 47 ff a5 61 7e 8b 93 01 bf 18 f2 36 b8 ed a0 b3 bd 75 82 56 e0 0c 6e d0 b8 44 83 44 97 55 3e 68 43 f7 d0 33 02 51 2b 5c 03 ab 11 26 b8 8c 65 f1 2c 6f 3e a0 5d			
OCSF	Fecha: (UTC / Ciudad de México)	13/07/2021T01:08:53Z / 12/07/2021T20:08:53-05:00			
	Nombre del respondedor:	OCSF ACI del Consejo de la Judicatura Federal			
	Emisor del respondedor:	Autoridad Certificadora Intermedia del Consejo de la Judicatura Federal			
	Número de serie:	70.6a.66.20.63.6a.66.03			